



Aumento de cultivos ilícitos : un arma letal para la
seguridad del Municipio de Jamundí

Oscar Hernán Daza Sandoval

Trabajo de grado para optar al título profesional:
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

2020

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CEM-2020



ESTUDIANTE

MY. Oscar Hernán Daza Sandoval

TUTOR

DR. OSCAR FELIPE BARRERA HERRERA

MY. Oscar Felipe Barrera Herrera

ALUMNO

MY. OSCAR HERNÁN DAZA SANDOVAL

AÑO ACADÉMICO 2020

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CEM-2020

**Aumento De Cultivos Ilícitos: Un Arma Letal Para La Seguridad Del Municipio De
Jamundí**



ESTUDIANTE

MY. Oscar Hernán Daza Sandoval

DOCENTE

DR. Oscar Felipe Barrera Herrera

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CEM-2020

Agradecimientos

Este análisis es la culminación de un arduo trabajo y muchas sacrificios en agradecimiento va primero al creador del universo que me dio la inteligencia y me permitió trabajar para completar este año de estudio. También quiero dar un reconocimiento a mi familia y más específicamente a mi esposa Carolina Muñoz y mi hijo Cristian Pineda que siempre me han apoyado y aconsejado a continuar mis estudios. Este presente trabajo es posible gracias a su apoyo.

A la misma vez quiero agradecer a mi director de trabajo de grado, el Sr. Oscar Pineda Herrera, magistrado Seguridad y Defensa, le estoy agradecido por el tiempo que me ha dedicado.

Aumento De Cultivos Ilícitos: Un Arma Letal Para La Seguridad Del Municipio De Jamundí

Por su constante motivación a mi trabajo, sus consejos y mucha que fueron esenciales para el éxito de esta tesis.

Agradezco igualmente a mis amigos que con su gran hospitalidad hicieron de mi estancia en Jamundí una experiencia muy agradable. A mi familia, quienes incondicionalmente respaldaron mis diversas inquietudes sobre el lenguaje con el fin de facilitar el desarrollo de esta tesis.

Agradecimientos

Este análisis es la culminación de un arduo trabajo y muchos sacrificios; mi agradecimiento va primero al creador del universo que nos dotó de inteligencia y me mantuvo saludable para completar este año de estudio. También quiero dirigir mi reconocimiento a mi familia, y más específicamente a mi esposa Carolina Martínez y mi hijo Cristóbal Daza que siempre me han apoyado y empujado a continuar mis estudios. Este presente trabajo fue posible gracias a su apoyo.

Así mismo, quisiera agradecer a mi director de trabajo de grado, el Sr. Oscar Felipe Barrera, magister en Seguridad y Defensa, le estoy agradecido por el tiempo que me ha dado, sus cualidades pedagógicas y científicas, su franqueza y simpatía. Aprendí mucho de usted, por su constante atención a mi trabajo, por sus buenos consejos y escucha, que fueron esenciales para el éxito de esta tesis.

Agradezco igualmente a mis amigos que tuvieron la amabilidad de releer la tesis, los que acogieron mi maestría como si fuera propia, quienes amablemente respondieron mis diversas preguntas sobre el terreno con el fin de facilitar el desarrollo de este trabajo.

Bogotá, noviembre 2020

Resumen

En los últimos años, el debate continental sobre políticas de drogas se ha vuelto mucho más activo e intenso. Parece haber una actitud más abierta para entablar un diálogo sobre las políticas actuales y, en algunos sectores, una voluntad de experimentar con nuevos enfoques en esta área.

Los altos índices de violencia vinculados al tráfico de drogas ilícitas, particularmente en el departamento del Cauca afectado por su producción, transporte y tráfico, fueron el principal factor de alarma que llevó a las máximas autoridades Nacionales a involucrarse más activamente en este debate. Entre otros factores determinantes en el origen de esta nueva actitud se encuentran los cambios en los patrones de consumo de drogas, la mayor prevalencia del consumo de drogas, la violencia que golpea a los grupos más vulnerables de la sociedad como los campesinos e indígenas del Cauca

Profundamente preocupados por el impacto de la violencia relacionada con las drogas y su flujo continuo en la región, los formuladores de políticas del Jefe de Estado, académicos y representantes de la sociedad civil han apoyado la adopción de políticas. Destinado a minimizar el papel del sistema de justicia penal en la lucha contra las drogas ilícitas.

A nivel de políticas, se han concluido una serie de iniciativas y acuerdos internacionales y regionales destinados a garantizar que los Estados miembros se comprometían con una serie de regulación y control para combatir la proliferación de violencia específicamente en el sector de Jamundí, Valle.

Palabras clave: políticas de drogas, Cauca, justicia penal, proliferación de violencia

Abstract

In recent years, the continental debate on drug policy has become much more active and intense. There seems to be a more open attitude to engage in dialogue on current policies and, in some sectors, a willingness to experiment with new approaches in this area.

The high rates of violence linked to the trafficking of illicit drugs, particularly in the department of Cauca affected by their production, transport and trafficking, were the main alarming factor that led the highest national authorities to become more actively involved in this debate. Among other determining factors in the origin of this new attitude are the changes in the patterns of drug consumption, the greater prevalence of drug consumption, the violence that hits the most vulnerable groups of society such as the peasants and indigenous people of Cauca

Deeply concerned about the impact of drug-related violence and its continued flow in the region, policy makers of the head of state, academics and civil society representatives have supported the adoption of policies. Aimed at minimizing the role of the criminal justice system in the fight against illicit drugs

At the policy level, a number of international and regional initiatives and agreements have been concluded to ensure that member states commit to a range of regulation and control to combat the proliferation of violence specifically in the Jamundí, Valle

Keywords: drug policy, Cauca, criminal justice, proliferation of violence

Tabla de Contenido

| | |
|--|----|
| Introducción | 1 |
| Planteamiento del problema | 3 |
| Pregunta de investigación | 4 |
| Justificación | 4 |
| Estado del arte | 6 |
| Objetivos | 9 |
| Objetivo General | 9 |
| Objetivos Específicos | 9 |
| Marco teórico | 9 |
| Metodología | 12 |
| Tipo de diseño | 12 |
| Importancia de la investigación | 13 |
| Alcance de la investigación | 13 |
| CAPITULO 1 | 15 |
| Una industria resistente | 15 |
| Enrutamiento Y Tránsito De Cocaína Y Su Economía | 17 |
| Nueva Generación de Carteles | 19 |
| Jamundí: entre narcos mexicanos y el deseo de sustituir la coca | 21 |
| Carteles mexicanos controlan el narcotráfico del Pacífico colombiano | 23 |
| Emisarios | 27 |
| CAPITULO 2 | 29 |
| Desarrollo Económico De Las Comunidades Con Cultivos Ilícitos | 29 |
| Efectos del desarrollo sobre el problema mundial de las drogas | 33 |
| El Gobierno Colombiano Y Su Política De Defensa Y Seguridad | 36 |
| CAPITULO 3 | 42 |
| Papel Del Estado En La Seguridad Del Municipio De Jamundí | 42 |
| Costo de las políticas de drogas | 44 |
| Minga Indígena: "Hay muchas razones para protestar" | 47 |
| Recuperación De Tierras Espera Una Ofensiva Masiva En El Cauca | 48 |
| CONCLUSIONES | 50 |
| REFERENCIAS | 55 |

Tabla de Figuras

| | |
|--|----|
| Figura 1 Semi Sumergibles Artesanales. Foto: AFP 2018..... | 25 |
| Figura 2 Ruta Crip y Cauca Fuente: Policía, Fiscalía 2017. | 30 |
| Figura 3 Resiembra de cultivos, Hectáreas fumigadas UNODC, 2019 | 31 |
| Figura 4 Impacto de la Cocaína en la Economía Colombiana UNODC, 2018..... | 33 |
| Figura 5 Línea De Tiempo Y Víctimas En El Valle Del Cauca Y Cauca 2000/2019..... | 37 |
| Figura 6 5 Áreas de manejo Especial, 2019, UNODC..... | 43 |

Introducción

Colombia goza de una reputación internacional debido a dos fenómenos que son característicos y parecen haber existido siempre: el cultivo ilícito y la violencia; Estos dos elementos están eminentemente presentes en las estructuras: económica, social y política, porque la producción y comercialización de los cultivos de coca y amapola mantienen una cierta situación de violencia. La violencia es un mito parcialmente fundado en Colombia como potencia narco-financiera de hecho, la producción de estupefacientes y su impacto en las estructuras sociales y políticas explican la situación de conflicto armado que el país sostuvo durante varias décadas

Esta visión generalizada y eminentemente reductiva, sin embargo, muestra una fuerte ignorancia de Colombia y sus complejas relaciones con violencia y producción ilícita. Por lo tanto, antes que nada, es necesario presentar los elementos esenciales de la producción de drogas en el país. Esta problemática de los cultivos ilícitos se evidencia sobre todo en Jamundí, Valle del Cauca, municipio que ha experimentado un crecimiento poblacional en la última década (pasando de 70 mil personas a casi 200 mil) y que se ha convertido en una bomba de tiempo con respecto a la presencia de cultivos ilícitos (entre 600 y mil hectáreas) en corregimientos como Villa Colombia, La Liberia y San Antonio. Si es cierto que Colombia es el primer productor de coca del mundo, la imagen transmitida del país a menudo es anticuado y excesivamente negativo.

Colombia sabe de la situación de conflictos relativamente violentos, fuertemente vinculada a la producción de cultivos ilegales y que, además, afecta a gran parte del territorio. Sin embargo, el objeto principal de esta investigación analizar el impacto del aumento de los

cultivos ilícitos entre los años 2016 y 2019 en la seguridad del municipio de Jamundí, será realizada bajo un enfoque mixto, en el que se analizará cualitativamente el aumento de cultivos ilícitos como el factor principal que incide en la seguridad de los habitantes de Jamundí, Valle del Cauca, y se analizará cuantitativamente el drástico aumento de los cultivos ilícitos en la región Pacífica, concretamente en Jamundí, en el periodo comprendido entre 2016 y 2019.

En este contexto, el estudio se centró en soluciones alternativas a este método de cultivo y los desafíos del desarrollo alternativo inspirado por esta situación. Por lo tanto, el desarrollo de esta disyuntiva a los cultivos ilícitos representa desafíos para comprender el problema de los cultivos ilícitos y los problemas de desarrollo. Alternativa en una sociedad en crisis general, un enfoque de análisis a nivel nacional es esencial. Por otro lado, la elección de la escala de estudio depende de varias limitaciones e intereses: se basa en un buen conocimiento del tema y, sobre todo, en una red organizaciones de recursos esenciales en Colombia para realizar trabajos de tesis. La elección de la escala de estudio es finalmente una restricción, la de no poder realizar trabajo de campo, zonas rurales productoras de coca y amapola representando un verdadero peligro para la seguridad.

Por lo tanto, la investigación tuvo que necesariamente centrarse la revisión bibliográfica de diferentes estudios realizados sobre cultivos ilícitos en el Valle y específicamente el sector de Jamundí, para determinar la relevancia e importancia de este y asegurar la originalidad de una investigación. Está compuesta de tres fases fundamentales, (Selección de la bibliografía de interés, organización de la información, Redacción del trabajo) las cuales deben retroalimentarse a lo largo de la búsqueda. Se contará con material informativo como libros, revistas de divulgación o de investigación científica, sitios Web etc.

Este análisis se presentará en tres capítulos el primero será una inducción al tema, el segundo capítulo expone diferentes teorías, tercero diseño metodológico, recomendaciones y conclusiones.

Planteamiento del problema

Colombia ha sido uno de los países de mayor producción de cultivos ilícitos en los últimos años. Según una medición realizada en 2018 por Naciones Unidas, el país alcanzó niveles históricos en cuanto a medición de coca, alcanzando un total de 171.000 hectáreas sembradas. Así mismo, esta medición también manifiesta que la producción de cocaína llegó a las 1.379 toneladas, una cifra nunca vista, poniendo en manifiesto que la producción de cultivos ilícitos ha aumentado considerablemente en este país.

Esta problemática de los cultivos ilícitos se evidencia sobre todo en Jamundí, Valle del Cauca, municipio que ha experimentado un crecimiento poblacional en la última década (pasando de 70 mil personas a casi 200 mil) y que se ha convertido en una bomba de tiempo con respecto a la presencia de cultivos ilícitos (entre 600 y mil hectáreas) en corregimientos como Villa Colombia, La Liberia y San Antonio, que han sido objeto de discrepancias entre la población civil, que piden que sean sustituidas voluntariamente por cultivos lícitos, y el Gobierno Nacional, que quiere a toda costa erradicarlas.

La situación anteriormente planteada desencadenaría una reacción violenta por parte de los campesinos, quienes están dispuestos a toda costa a evitar que el Gobierno colombiano erradique los cultivos. Por otro lado, el control de estas hectáreas ha sido una de las principales causas por la que la violencia en esa región ha recrudecido, presentándose hechos de sangre tanto en la zona rural y en la zona urbana. Con la salida de las FARC por el proceso

de paz llevado a cabo desde 2016, las diversas organizaciones nacionales e internacionales (como el Cartel de Sinaloa) que quieren apoderarse de los cultivos ilícitos existentes en la zona desarrollan una guerra sin cuartel en el que no solo se matan entre ellos, sino a muchos campesinos inocentes.

Pregunta de investigación

¿Qué impacto genera el aumento de cultivos ilícitos entre 2016 a 2019 para la seguridad del municipio de Jamundí, Valle del Cauca?

Justificación

A nivel investigativo, este estudio pretende aportar a la abundante información que existe sobre la problemática de los cultivos ilícitos y sus consecuencias en el desarrollo del país, analizando concretamente la situación que se presenta en Jamundí, que es uno de los municipios de la región pacífica en el que más se presenta esta situación.

Esta investigación es pertinente porque mostrará la problemática de los cultivos ilícitos en el municipio de Jamundí que, a pesar de ser uno de los más afectados, no ha sido objeto de estudio por parte de las investigaciones orientadas a los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Diversos autores como Castañeda (2019), Gómez (2018) y Niño (2005) destacan la injerencia que ha tenido el narcotráfico en los problemas de orden público en territorio colombiano, sobre todo en la región pacífica, pero hay escasa información que permita conocer cómo Jamundí se ha visto particularmente afectada por los cultivos ilícitos.

Este estudio busca entregar una propuesta para combatir y mitigar la problemática de los cultivos ilícitos en el municipio de Jamundí, que ha sido fuertemente golpeado por las bandas ilegales que pretenden apoderarse del mercado del narcotráfico en el municipio,

exponiendo la vida de la población civil y la fuerza pública, a su vez atentando contra la seguridad nacional.

Los cultivos ilícitos han sido una problemática que ha afectado a Colombia desde décadas siendo objeto de investigación de varias agencias (Garcón y López (2018) citan a la ONDCP (2017) para manifestar que "en 2017 los cultivos de coca en Colombia continuaron la tendencia al alza, aunque con un ritmo menor, llegando al récord histórico de 109.000 hectáreas" (p. 2). Este concepto es reforzado por Arbeláez (2017), quien plantea

cómo Colombia se ha convertido en uno de los principales países productores y exportadores de cocaína a pesar de la aplicación de una política antidroga por parte del Gobierno colombiano, las áreas cultivadas han aumentado en los últimos años. Este crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos también es objeto de investigación por parte de autores como Junguito, Partati y Delgado (2017), quienes citan a la UNODC (2017) para exponer algunas razones por las que se presenta este flagelo:

Incremento del valor de la hoja de coca, pasando de COP\$2.150/kg en 2014 a COP\$3.000/kg en 2015; reducción del riesgo asociado con la actividad ilícita a partir de la suspensión de la aspiración aérea y el combate a la criminalidad manual mediante bloques a la policía y el ejército; posible incremento prospectivo de incentivos como contratación por la eliminación de los cultivos de coca y otros elementos cognitivos que afectan las actividades ilícitas en las regiones y favorecen las actividades ilícitas; relación estrecha con la minería legal; asociada principalmente con las fluctuaciones en el precio del oro. Cuando este es bajo se da un repunte de los cultivos ilícitos y viceversa, indicando la existencia de un "efecto sustitución" entre estas dos actividades ilegales (p. 29).

Por su parte, Losada (2017) presenta una estimación económica de datos de panel para analizar la relación entre algunos productos agrícolas y los cultivos de hoja de coca en

Estado del arte

Los cultivos ilícitos han sido una problemática que ha afectado a Colombia desde hace décadas, siendo objeto de investigación de varios autores. Garzón y Llorente (2018) citan a la ONDCP (2017) para manifestar que “en 2017 los cultivos de coca en Colombia continuaron la tendencia al alza, aunque con un ritmo menor, llegando al récord histórico de 209.000 hectáreas” (p. 2). Este concepto es reforzado por Arboleda (2017), quien plantea cómo Colombia se ha convertido en uno de los principales países productores y exportadores de cocaína; a pesar de la aplicación de una política antidrogas por parte del Gobierno Colombiano, las áreas cultivadas han aumentado en los últimos años. Este creciente aumento de los cultivos ilícitos también es objeto de investigación por parte de autores como Junguito, Perfetti y Delgado (2017), quienes citan a la UNODC (2015) para exponer algunas razones por las que se presenta este flagelo:

Incremento del valor de la hoja de coca, pasando de COP\$2.150/ kg en 2014 a COP\$3.000/kg en 2015; reducción del riesgo asociado con la actividad ilícita a partir de la suspensión de la aspersión aérea y el combate a la erradicación manual mediante bloqueos a la policía y el ejército; posible incremento prospectivo de incentivos como contraprestación por la eliminación de los cultivos de coca y otros elementos coyunturales que afectaron las actividades lícitas en las regiones y favorecieron las actividades ilícitas; relación estrecha con la minería ilegal, asociada principalmente con las fluctuaciones en el precio del oro. Cuando éste es bajo se da un repunte de los cultivos ilícitos y viceversa, indicando la existencia de un “efecto sustitución” entre estas dos actividades ilegales. (p. 59).

Por su parte, Losada (2017) presenta una estimación econométrica de datos de panel para analizar la relación entre algunos productos agrícolas y los cultivos de hoja de coca en

un periodo de 7 años (2007-2014), con el objetivo de hallar una alternativa de producción distinta a los productos ilícitos. El autor plantea que la producción de cultivos ilícitos es producto de las decisiones tomadas por el costo de oportunidad, a partir de la carencia de infraestructura y de un encadenamiento productivo de otros alimentos. Para medir el potencial de los cultivos ilícitos, recurrimos a Villamarín y Rincón (2016), quienes nos dan una perspectiva concreta sobre el papel en el contexto colombiano:

Para tener una referencia sobre el potencial del mercado de drogas ilícitas, el exdirector de la Política contra las drogas, en una entrevista que le realizo a la revista Semana (Revisa Semana, 2014), declara, que Colombia ocupa desde hace 15 años el primer puesto en incautaciones de cocaína, el tercer lugar en incautaciones de planta de marihuana, este mismo artículo menciona que el informe de la ONU muestra que la producción de mata de coca presentó un descenso de 102 mil hectáreas en 2002 a 48 mil hectáreas en 2012 (pp. 103-104).

Por otro lado, autores como Moreno (2019) y López et al. (2017) reiteran que la coca ha sido la principal fuente de financiación de los grupos armados para mantener el conflicto que tanto desangró a Colombia en las últimas décadas. Luego del desmantelamiento de los carteles de la droga, a mediados de los años noventa, los grupos armados encuentran una fuente importante de recursos para alimentar el conflicto. Es por ello por lo que el narcotráfico se ha convertido en el factor más importante para que los grupos armados opten por controlar aquellos territorios que poseen cultivos de coca, con el objetivo de lograr la producción, la transformación y la posterior comercialización de la cocaína. Este proceso trae consigo una bonanza de capitales que aumenta la violencia, delincuencia y captura de la institucionalidad local y afecta los valores de las comunidades. La principal característica de

los cultivos ilícitos y los grupos armados es que se localizan en territorios aislados, con suelos difíciles de cultivar, con precarias condiciones sociales, problemas de infraestructura y con una frágil presencia institucional.

Zuluaga-Mogollón M.V., Zuluaga-Mogollón M.P. y Rozo (2019) citan a la DRP (2018) para detallar cómo los campesinos dejan de cultivar alimentos por el auge de la amapola, al ser más rentable. Así mismo, afirman que la “producción de cultivos lícitos para el 2003 se baja y aumentan los ingresos por los cultivos ilícitos y con esto se aumenta en la remuneración de los jornales. La rentabilidad era del 300 por ciento con respecto a otros cultivos” (p. 26).

Llegados a este punto podemos apreciar que los cultivos ilícitos se han convertido en un problema que afecta en demasía al país, teniendo en cuenta que es uno de los principales exportadores de coca en el mundo. No obstante, teniendo en cuenta lo manifestado por los autores anteriormente, hubo una reducción en el aumento de los cultivos de coca; esto concuerda con los primeros años del posconflicto, tras el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, que puso fin a una guerra que llevaba más de cincuenta años. Sin embargo, resulta preocupante observar las razones por las cuales se presenta el aumento de cultivos ilícitos, entre los que se destaca el incremento del valor de la hoja de coca, que para un campesino de escasos recursos o para un narcotraficante es mucho dinero, y su relación con la minería ilegal, sin duda otro flagelo que azota al país, el cual se complementa con los cultivos ilícitos para generar todo un capital ilícito que es apetecido por bandas criminales.

Por otro lado, Serrano López (2017), citando a Nicholson y Snyder (2010), proporciona una mirada de los cultivos ilícitos desde el punto de vista de la economía,

enfaticando en que el mercado de los cultivos ilícitos es un mercado monopsónico, los cuales “se definen como aquellos en los que la demanda de una materia prima está concentrada en un comprador único, y es considerado uno de los casos de competencia imperfecta en la que existe poder de mercado” (p. 51).

Objetivos

Objetivo General

Analizar el impacto del aumento de los cultivos ilícitos entre los años 2016 a 2019 en la seguridad del municipio de Jamundí

Objetivos Específicos

1. Examinar el contexto en el que se desenvuelve la problemática de los cultivos ilícitos en Jamundí.
2. Establecer el papel de la comunidad, las bandas criminales y el Gobierno nacional en el aumento de los cultivos ilícitos entre los años 2016 y 2019 en la seguridad del municipio de Jamundí.
3. Debatir las estrategias adoptadas por el Gobierno nacional para afrontar la problemática del aumento de los cultivos ilícitos en Jamundí.

Marco teórico

Para hablar de seguridad, recurrimos a autores como Serrano López (2017), quien la define como “un bien sobre el que no operan los principios de rivalidad y exclusión, lo que la convierte en un bien público por excelencia” (p. 56). Por lo tanto, la seguridad es un bien del que deben gozar todos los ciudadanos sin excepción, por lo que podemos catalogarla como un derecho al que todos debemos acceder. En el contexto colombiano, la seguridad

nacional fue introducida a partir de la política exterior norteamericana como respuesta a diversos factores que atentarían contra la seguridad y el desarrollo de la nación, tales como guerrillas, activismo social y estudiantil, y grupos de autodefensa en ciertos sectores olvidados del país (Puentes, 2017). Por otro lado, Pastrana y Castro (2017) destacan que la Seguridad Nacional sufrió cambios en su propósito, puesto que no sólo se limitó a ser un conjunto de medidas y estrategias civiles y gubernamentales con el objetivo de garantizar la seguridad pública y la seguridad humana, sino que impulsó “doctrinas de defensa al interior del territorio colombiano, tales como “la preparación y mentalización para eliminar al enemigo”” (Tibiletti, 2001; Saint-Pierre, 2012, p.43, citado en Pastrana y Castro, 2017, p. 26).

Con el tiempo, estos factores fueron aumentando o disminuyendo su participación en el panorama nacional, y le dieron la bienvenida a otro elemento que también atentaría contra ese derecho de seguridad que debe tener todo ciudadano: los cultivos ilícitos, un problema que ha afectado la seguridad de Colombia y del mundo, puesto que su complejidad ha alcanzado niveles internacionales. Los cultivos ilícitos son definidos por Bolaños (2016) como “aquellas plantaciones de las cuales pueda producirse algún tipo de droga que cree dependencia” (p.13). Este ha sido un problema de vieja data en Colombia, siendo un problema estructural que ha influenciado negativamente a la sociedad (Cabra, 2019).

Romero y Silva (2009) afirman que “históricamente los cultivos de uso ilícito en Colombia estuvieron demarcados por la cercanía geográfica con países como Perú, Ecuador y Bolivia, siendo Perú y Bolivia los mayores productores de hoja de coca en los años 70” (p. 238); así mismo, citan a la Defensoría del Pueblo (2000, p. 24) para expresar que “algunos de estos contrabandistas, principalmente de los mandos medios de sus organizaciones,

iniciaron el tráfico de coca, trayéndola de Ecuador casi en forma lícita, pues los funcionarios de sus aduanas no la conocían” (p. 238). A partir de los años 90 su producción aumenta considerablemente, debido al “aumento de la demanda externa y la disminución de estos cultivos ilícitos en países como Perú y Bolivia (Villamarín y Rincón, 2016, p.106). Con la aparición de los cultivos ilícitos se generó un cambio en el panorama agricultor de Colombia, puesto que estas plantaciones empezaron a tener una alta demanda y amplios recios en el mercado, por lo que los campesinos vieron una oportunidad de mejorar su condición de vida, tal como lo explican Romero y Silva (2009):

Las relaciones sociales que la siembra de cultivos ilícitos generaba se caracterizaba por tener grandes posibilidades de satisfacción e incluir la participación de un número considerable de campesinos, personas con diferentes tradiciones y creencias, pero unidas por un único fin: el fin de tener ganancias económicas que les permitiera llevar una vida digna, satisfaciendo las necesidades básicas y suplementarias que exigía el campo (p. 239).

En este punto podemos afirmar que la aparición de los cultivos ilícitos hace casi 50 años cambió por completo el panorama social en Colombia, específicamente en el sector agricultor. Teniendo en cuenta que los campesinos han sufrido con la indiferencia del Estado desde hace mucho tiempo, los cultivos ilícitos aparecen como una solución para obtener buenas ganancias y mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, este flagelo de los cultivos ilícitos también trajo como consecuencia la transformación de actores en el escenario del conflicto armado y el narcotráfico, puesto que “la participación de grupos insurgentes como las FARC y ELN transformaron los territorios de una manera irreversible, integrando la economía local a la ilegalidad, pues la cultivación,

transformación y comercialización fueron determinantes para la bonanza cocalera que estaba por venir” (Parra Castaño, 2018, p. 8). En este sentido, el integro de los grupos armados como principales exportadores de droga nos presenta una nueva perspectiva acerca de los cultivos ilícitos, puesto que estos nuevos “dominadores” de este flagelo no solo son unos simples narcotraficantes, sino que poseen otros objetivos en su lucha por doblegar el estado colombiano. Y con los cultivos ilícitos como fuente de recursos, su caída está lejos de consumarse.

Metodología

Tipo de diseño

Esta investigación será realizada bajo un enfoque mixto de tipo descriptivo, en el que se analizará cualitativamente el aumento de cultivos ilícitos como el factor principal que incide en la seguridad de los habitantes de Jamundí, Valle del Cauca, y se analizará cuantitativamente el drástico aumento de los cultivos ilícitos en la región Pacífica, concretamente en Jamundí, en el periodo comprendido entre 2014 y 2019.

Para su desarrollo, se tendrán en cuenta las siguientes herramientas: revisión bibliográfica acerca de la problemática del aumento de cultivos ilícitos en la región del pacífico, sobre todo en la población de Jamundí. Fue posible abordar el problema con un mayor nivel de profundidad y con una mirada que facilitara la construcción de recomendaciones de política pública, la revisión de información secundaria tiene como fuente privilegiada sin descartar otras.

Importancia de la investigación

La importancia de esta investigación radica en que la problemática de los cultivos ilícitos puede traer consecuencias graves para Jamundí, uno de los principales municipios de Valle del Cauca, que “por su excelente ubicación geográfica se ha convertido en un centro de comercio mediante el cual se abastecen poblaciones del norte del Cauca” (Rodríguez, 2017, p. 23). Por lo tanto, al ser un municipio importante a nivel comercial para Valle del Cauca y la región Pacífica, el aumento de cultivos ilícitos supone una amenaza a la economía y a la seguridad del municipio y del departamento. La investigación analizará la problemática de los cultivos ilícitos en la población de Jamundí, Valle del Cauca, que está ubicado tan geoestratégico en un departamento tan desarrollado industrial y económicamente, afectando a toda la región con el problema del narcotráfico y los cultivos ilícitos. Analizar el flagelo que azota este municipio nos permitirá proponer estrategias para fortalecer la seguridad en esta población.

Jamundí un municipio ubicado a 16 kilómetros de Cali, muy a pesar de la cercanía con la ciudad las disputas territoriales entre grupos armados ilegales corren el riesgo de extenderse a una violencia más generalizada. Los bandidos y narcotraficantes llegan a influir en el crecimiento del fenómeno de convergencia criminal en una región tan desarrollada.

Alcance de la investigación

Se espera que esta investigación ayude a analizar de forma más concreta el aumento de cultivos ilícitos en el municipio de Jamundí, un tema que ha sido poco explorado por autores contemporáneos, puesto que los principales sectores donde se presenta esta problemática se encuentran en el departamento de Nariño. No obstante, la información proveniente de los artículos conseguidos en la biblioteca virtual SciELO nos puede servir

como como punto de partida para el desarrollo de esta problemática. Por lo tanto, esta investigación es factible como un documento que busca explorar un tema que aún no se ha desarrollado completamente.

CAPITULO 1

Una industria resistente

Las autoridades están tratando de frenar el cultivo de coca erradicando las plantas y, hasta hace poco, rociando productos químicos sobre las áreas donde los campos de coca son más frecuentes. Sin embargo, Colombia tuvo una producción potencial de cocaína récord de 1,379 toneladas en 2017. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, destruyó más de 80,000 hectáreas de coca y confiscó más de 400 toneladas de cocaína en 2018.

Combatir la producción de cocaína es complicado. Muchos agricultores no tienen alternativa y el gobierno de Colombia carece de la capacidad de enfrentar a la industria que está protegida por grupos armados ilegales con enormes recursos financieros para corromper a los funcionarios estatales.

Además, las potencias extranjeras no están de acuerdo sobre cómo combatir el tráfico ilegal de drogas, lo que ha llevado a diferentes esfuerzos antinarcóticos que anulan el trabajo del otro. (Thoumi, 2005)

Mientras que las Naciones Unidas y Europa han estado impulsando la sustitución de cultivos y el desarrollo rural, Estados Unidos ha estado presionando por métodos represivos como la erradicación forzada y la fumigación aérea con productos químicos. Una de las razones como lo reconocen informes de la misma Gobernación y la mandataria Dilian Francisca Toro se debe a que Jamundí nunca fue incluido en el programa nacional de sustitución de cultivos que está a paso lento en la región, un programa que arrancó en 2017 en el Valle. (Tiempo, 2020)

Es importante destacar que, en las montañas de la cordillera Occidental, la zozobra por la violencia sigue latente. Los habitantes de los tres corregimientos Villa Colombia, La

Liberia y San Antonio, en los que hay sembradas entre 600 y 1.000 hectáreas de coca, siguen empeñados en sustituirlas de manera voluntaria por cultivos lícitos, mientras el Gobierno insiste en la erradicación forzada

Preocupa también, según el informe, la presencia de “emisarios” mexicanos de carteles de la droga como Los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa, que estarían asegurando la compra directa de cocaína de alta pureza, el envío de cargamentos a través del Pacífico y evitar intermediarios en las negociaciones.

Los carteles mexicanos de la droga, que alguna vez fueron vistos principalmente como mensajeros para los productores de cocaína de América del Sur, han extendido sus poderosos tentáculos profundamente en esta nación andina, En América del Sur, los grupos mexicanos están pasando por alto a los colombianos y haciendo sus propios acuerdos con los cocaleros en Colombia, Perú y Bolivia, estableciendo docenas de pequeños laboratorios de procesamiento de cocaína de última generación (Caicedo, 2005)

Los grupos criminales mexicanos están adoptando un nuevo enfoque para el tráfico de cocaína, enviándolo fuera de Colombia en una forma no refinada llamada base de coca y procesándolo en México, según el jefe antinarcóticos de Colombia.

Dado que los consumidores de drogas en los EE. UU., El mercado más grande de cocaína, quieren cocaína en polvo, el cambio solo puede significar que los grupos criminales mexicanos ahora están refinando la droga en México en sus propios laboratorios

El municipio limita al norte con el municipio de Santiago de Cali; sur con el departamento del Cauca, Municipio de Buenos Aires y Santander de Quilichao; al oriente

con el departamento del Cauca, Municipio de Puerto Tejada y Villarrica; y al occidente con el municipio de Buenaventura, Parque Nacional Natural los Farallones. Los ríos Principales son el Cauca, Río Claro, Guachinte, Jamundí, Jordán, Pital y Timba. Las actividades económicas principales son la agricultura, ganadería y 34 minerías. Se explotan minas de Carbón, Oro, Plata y Bauxita, además de productos como maíz, soya, millo, café, arroz, cacao y plátano. Los corregimientos como Potrerito, Río Claro, Robles, Quinamayó, Villa paz, Villa Colombia, San Vicente, en especial la vereda La Estrella, San Antonio, Puente Vélez, Timba, son lugares comúnmente visitados, por la poca intervención del hombre, lo que permite apreciar al máximo la naturaleza. (Bolaños & Daza, 2012). En la actualidad el municipio cuenta con una multiplicidad de atractivos turísticos y recreativos que lo ubican en un lugar privilegiado dentro de la región, la existencia de diferentes climas y topografías, de abundantes recursos hídricos y llamativos paisajes naturales, son características que semanalmente hacen que lleguen grandes cantidades de turistas”. (Alcaldía Jamundí)

Enrutamiento Y Tránsito De Cocaína Y Su Economía

El sector de la coca-cocaína se desarrolló en el contexto de una crisis generalizada en las economías latinoamericanas, en el contexto de una continua caída en el precio de las materias primas y la implementación de políticas de ajuste estructural de los años ochenta, en Bolivia, debido a que habían sido despedidos durante la privatización de las minas de estaño, miles de indios barrieron la región amazónica de Chapare, donde plantaron coca.

Producida en la región de los Andes (Bolivia, Perú, Colombia), la coca se convierte en cocaína en Colombia, luego transita por el Caribe, América Central y México antes de ingresar al territorio del principal consumidor mundial, Estados Unidos.

Bolivia, Colombia y Perú tienen el monopolio de la producción de hoja de coca y el tráfico se extiende a toda la región (México, Venezuela, Ecuador). Argentina está comenzando a preocuparse por la proliferación de laboratorios en el norte del país. Brasil tampoco se libra del narcotráfico, incluso si en términos de incautación, el país solo ocupa el cuarto lugar entre los traficantes en la región. También ha sido durante varios años el país de salida de nuevas rutas de tráfico hacia Europa a través de África occidental. Con la cooperación policial entre Estados Unidos y Europa fortalecida en el Caribe, las rutas preferidas ahora son México y el Atlántico.

Casi el 80% de la cocaína exportada a los Estados Unidos proviene de Colombia. Mientras más luchan los estados contra los narcotraficantes, más ingenio compiten para llevar sus productos desde los lugares de producción a las áreas de consumo. (Organización de los Estados Americanos, 2013)

El narcotráfico en América Latina es un vector económico verdaderamente sustancial y sin precedentes. En este sentido, el narcotráfico que tiene lugar en esta parte del mundo no puede reducirse a una mera ganancia lucrativa. De hecho, el comercio de "oro blanco" es una verdadera institución con vínculos políticos, culturales, ideológicos y económicos. Por lo tanto, debemos hablar en la escala de una multinacional y de las relaciones entre los estados y las finanzas globales.

La geografía de la cocaína ha cambiado, este mercado que anteriormente se extendía a Bolivia, Perú y Colombia ahora se ha extendido por todo el subcontinente latinoamericano (México, Argentina, Venezuela, Brasil, Guyana...)

La cocaína ahora beneficia a los traficantes, la policía, los funcionarios gubernamentales y los banqueros de alto y bajo rango. La escala del fenómeno permitió la introducción del término "dólares de coca" en la jerga económica.

Veremos que la guerra contra las drogas no se limita a frenar un fenómeno que aparentemente nunca será controlado. Esta guerra representa, por ejemplo, para los Estados Unidos, un poderoso medio de presión e intervención en sus áreas de influencia.

El problema que ofrece coherencia a nuestro pensamiento es el siguiente:

La lucha contra el narcotráfico es muy costosa para los países productores de coca, los ingresos en divisas del tráfico son rentables para ellos, mientras que los materiales "legales" que producen y exportan se venden cada vez menos. ¿Cómo entonces contrarrestar el flagelo de las drogas sin que las comunidades culturales que lo cultivan pierdan su fuente de ingresos?

Nueva Generación de Carteles

El término "cartel" fue introducido en Colombia a principios de la década de 1980 por el sistema de justicia norteamericano para explicar las alianzas entre narcotraficantes y reunir las diversas investigaciones judiciales en un solo juicio. Aunque el concepto se ha establecido rápidamente en la prensa y la opinión pública internacional, su alcance y precisión tienden a desviarse de la realidad. Así, los "carteles" nunca tuvieron una expresión orgánica concreta, duradera y definida como parece indicar el concepto. Si esto sucedió, fue solo circunstancial. Lo mismo ocurre con la consolidación de alianzas, sistemas de colaboración y participación en tareas específicas de las diversas etapas del comercio.

La denominación de "mafia" ha tenido un destino similar al del "cartel": se refiere indiscriminadamente a todos aquellos que se ocupan del tráfico ilícito de drogas. Una vez que su uso ha sido aceptado y generalizado, parece que no refleja la realidad colombiana. El origen italiano del concepto presupone una especialización en el ejercicio ilegal del poder en materia de protección, robo y extorsión. En Colombia, el tráfico de drogas se utiliza exclusivamente para la producción y comercialización de bienes y servicios ilegales. El control territorial de la mafia persigue de manera parasitaria la apropiación de los recursos que circulan en zonas de dominación, mientras que el control territorial de los narcotraficantes no es necesariamente monopolístico y busca fundamentalmente garantizar la seguridad del desarrollo del comercio. En términos de organización, la mafia italiana se ha caracterizado por un tipo de asociación hermética y familiar. Las redes de tráfico de drogas, incluso si favorecen la participación familiar, deben ser abiertas y flexibles para permitir la producción y circulación de drogas en las condiciones requeridas por el tráfico

Por supuesto, se pueden detectar similitudes entre la mafia italiana y los narcotraficantes colombianos. El mercado de drogas no es pacífico y a menudo se presenta como una expropiación y extorsión violentas. Así encontramos ciertos repertorios de acción y en la medida en que el mercado crece, desarrollamos y generamos ciertas formas de poder. Además, a partir de 1987, la mafia italiana se acercó a los narcotraficantes colombianos para desarrollar un comercio racionalizado y producir una mercancía que probablemente se exportaría a Europa. Como resultado, las diferencias se hicieron menos notorias, allanando el camino para "la homogeneización del crimen organizado". (Briceño, 2002)

Pero en el caso colombiano, el análisis revela una realidad más compleja. El narcotráfico es solo una versión de lo que podría llamarse "crimen organizado". Por supuesto,

si se supone que este concepto se refiere a grupos y actividades ilegales con el propósito de enriquecer y acumular poder, entonces la categoría de "crimen organizado" podría incluir fácilmente agrupaciones del narcotráfico en Colombia. Sin embargo, en virtud de sus características específicas, ciertos autores prefirieron catalogarlos como "organizaciones de tipo mafioso".

El departamento más afectado en Colombia sigue siendo Nariño (suroeste), limítrofe con Ecuador en la costa del Pacífico, con un área de cultivo de coca tan grande como la de todo Perú, el segundo país del mundo en términos de plantaciones ilegales. (Luque, 2016)

Pandillas de narcotraficantes y grupos disidentes de las antiguas FARC guerrilleras, desarmados y transformados en un partido político desde el acuerdo de paz de 2016, compiten por el control de esta área estratégica para la exportación de cocaína al país. Estados Unidos, el principal consumidor mundial.

Las regiones fronterizas de Ecuador y Venezuela son aquellas con las áreas más grandes de narco cultivos, según representante de Colombia para esta agencia de la ONU, Bo Mathiasen. Así, el 64% de los aumentos en plantaciones ilícitas se registraron en los departamentos de Antioquia (noroeste), Cauca (oeste), Putumayo (sur) y Norte de Santander (noreste). Y el 80% de las culturas han estado en los mismos lugares durante diez años. Por lo tanto, Colombia sigue siendo el principal productor de coca y productor de cocaína por delante de Perú (43.900 ha) y Bolivia (24.500), según la ONU.

Jamundí: entre narcos mexicanos y el deseo de sustituir la coca

Mientras más de siete mil campesinos de la cordillera de Jamundí insisten en oponerse a la erradicación forzada de los cultivos de coca por la Fuerza Pública, los narcos mexicanos

y colombianos siguen utilizando ese corredor para hacer sus transacciones de droga. El conflicto en Jamundí se ha desarrollado por igual en la zona urbana como en la rural. En el recuerdo están todavía las acciones de la guerrilla a finales de los años 90. En junio de 1998 el frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (Eln) destruyó (atacó con explosivos y le prendió fuego) la sede de la Alcaldía. Luego, el mismo grupo bajaría desde los Farallones, en la madrugada del 8 de enero de 1999, y atacaría las instalaciones del centro comercial Alfaguara, incursión en la que robaron dinero de un banco.

Ahora, aunque persiste la presencia de diferentes grupos armados organizados, todo apunta a que es la columna Jaime Martínez, al mando de alias Mayimbú (disidentes de la exguerrilla de las Farc), la que controla este corredor entre el norte del Cauca y sur del Valle.

Son cerca de 105 hombres que están en el radar de la Tercera Brigada del Ejército. Fueron combatientes de las extintas columnas Gabriel Galvis, Miller Perdomo y Jacobo Arenas, hoy ejercen control en la entrada a la región del Naya, que incluye a dos municipios vecinos: Buenos Aires y Suárez, en el norte del Cauca. Ellos, dicen los pobladores, son los guardaespaldas de los narcotraficantes mexicanos que llegan a la zona para negociar la cocaína que sale por el Pacífico caucano.

Jamundí, además de ser un municipio reconocido por sus deportistas (como la judoca Yuri Alvear, medallista olímpica en 2012) también es tristemente célebre porque en sus tierras se han asentado renombrados capos de la mafia como los hermanos Ochoa Vásquez, Wílber Varela (alias Jabón) y Diego Montoya (alias Don Diego). Los dos últimos libraron

una guerra en este siglo, que les costó (el 22 de mayo de 2006) la vida a diez policías de la Dijín, quienes murieron por “fuego amigo” por parte del Ejército Nacional.

Hoy, el rumor es que el cartel de Sinaloa tiene su centro de operaciones en Jamundí (Valle). Para el director de Fiscalías del Cauca, Raúl González Flechas, los mexicanos que han visto en zona rural de Jamundí son compradores individuales (no se sabe si del cartel de Sinaloa) que vienen a garantizar que la cocaína sea de buena calidad y que el dinero no se pierda en las negociaciones.

Pero ¿en qué cambió el negocio en este corredor tras la salida de las Farc? El fiscal González dice que la producción, la ruta de los cultivos y la distribución no han variado mucho. No obstante, han cambiado los actores: “Antes había un dinamizador único que era las Farc, por el poder que tenían, y ahora se disgregó en varias organizaciones. Por eso, a veces se encuentran entre estos mismos bandidos y se dan bala”, agregó. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ya desmintió esa hipótesis y el gobernador del Cauca, Óscar Campo, dice que se trata de transacciones de cocaína de mexicanos que siguen utilizando esa ruta de narcotráfico hacia Centroamérica.

Carteles mexicanos controlan el narcotráfico del Pacífico colombiano

Una agencia del gobierno de los Estados Unidos, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) "anunció en 2018, que pagaría aproximadamente \$ 5 mil millones por programas sociales en los territorios afectados por cultivos ilegales", la ayuda contribuirá al "desarrollo regional, aumentando el ingreso per cápita y el empleo".

"Es esencial no solo involucrarse en la erradicación (de los cultivos de coca), sino también en los aspectos positivos de las cosas y en el desarrollo", dijo desde un área de cultivo de coca en el Valle del Cauca el presidente Duque.

Parte de la ayuda estadounidense se utilizará para reemplazar cultivos ilícitos y financiar proyectos de integración para combatientes de las antiguas guerrillas de las FARC que aceptaron el histórico acuerdo de paz de 2016. Después de que 7,000 combatientes de las FARC depusieran sus armas, grupos armados locales y carteles mexicanos como el de Sinaloa tomaron el control del narcotráfico en regiones remotas de Colombia, principalmente en los departamentos cercanos a los puertos marítimos del Pacífico colombiano

El presidente Donald Trump criticó severamente el aumento récord de los narco cultivos en Colombia, que según la ONU alcanzó las 169,000 hectáreas plantadas en 2018, con un potencial de producción de 1,120 toneladas de cocaína. (Posada, 2019)

Al llegar al poder en agosto de 2018, el presidente Duque lanzó un plan antidroga que planea reducir a la mitad los territorios que albergan cultivos de coca entre 2022 y 2023. También promete reactivar el uso del herbicida glifosato rociado por el aire para destruir los cultivos de coca, una iniciativa bienvenida por los Estados Unidos. (Mejía, 2019).

Semi Sumergibles Artesanales

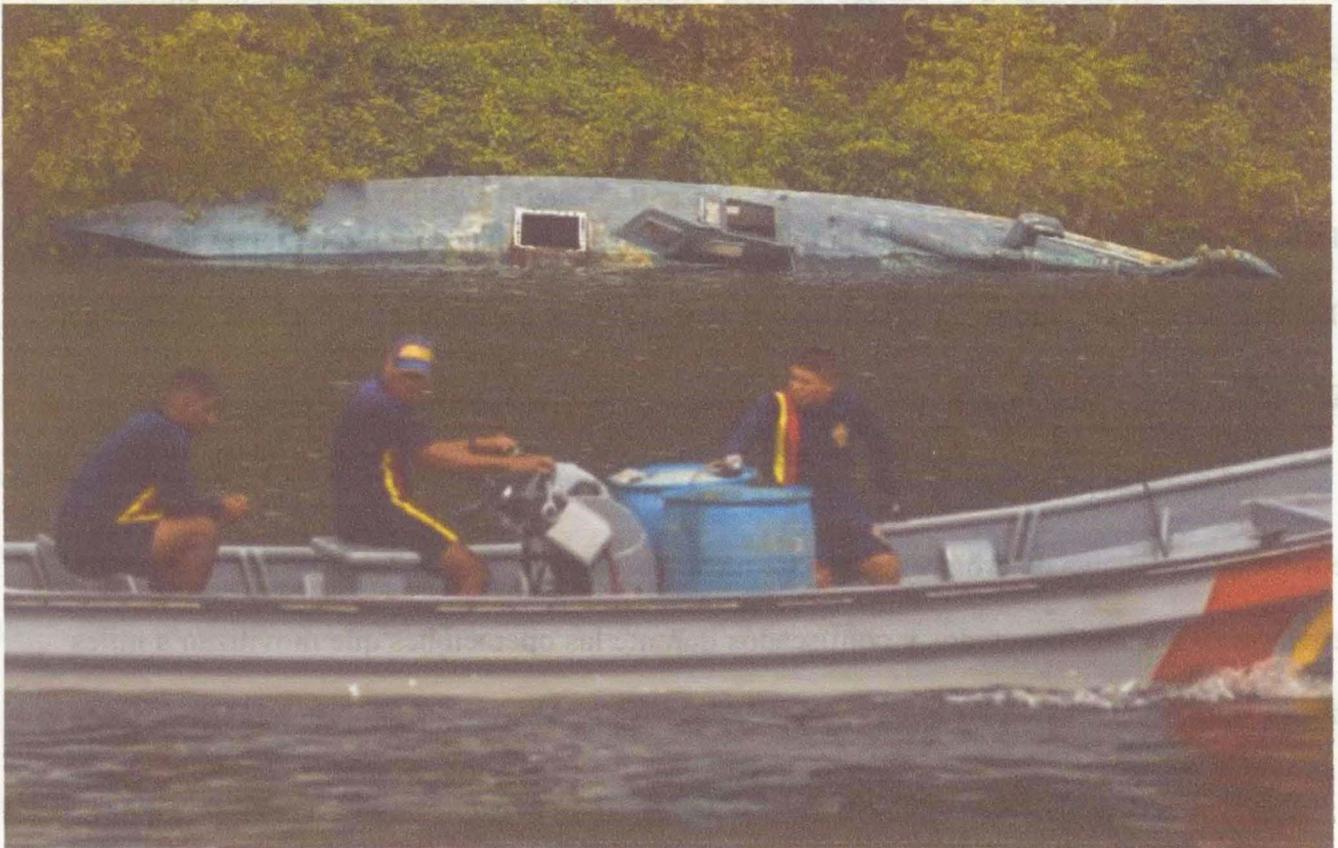


Figura 1 Semi Sumergibles Artesanales. Foto: AFP 2018

Las lanchas rápidas transportan docenas de latas de gasolina a los laboratorios de fabricación de cocaína en la selva del Pacífico colombiano, donde los mexicanos ahora supervisan los envíos a los Estados Unidos. El narcotráfico no cede, a pesar de la ofensiva militar. La presencia de traficantes mexicanos, y solo con palabras encubiertas. La mayoría de las veces, el silencio es la regla entre las cabañas de madera que bordean las orillas del Mira y el Mataje, ríos del Nariño, en el departamento suroccidental de Colombia, se mueven "fácilmente y la gente los ve en Guapi, Timbiquí, (pueblos) de la ciudad de López de Micay,

Con el acuerdo de paz de 2016, los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejaron las armas y abandonaron este sector, principalmente poblado por indios y negros, que controló durante décadas. Desde entonces,

los mexicanos ya no se contentan con esperar por las drogas, se han reorganizado. Los famosos carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación enviaron sus propios emisarios mientras los grupos armados disputaban el control de las rutas de la droga. (Sampó, 2019)

"Vienen y comprueban el clorhidrato de cocaína, su pureza", especifica el general Jorge Isaac Hoyos, comandante de la Fuerza Conjunta Hércules del ejército, en el puerto de Tumaco, principal ciudad de Nariño y municipio contando las plantaciones de coca más grandes del mundo.

Pero "los colombianos mantienen la estructura del narcotráfico", agregó el oficial que encabeza la ofensiva de drogas. En la base naval de Tumaco, los sumergibles utilizados para enviar cocaína son incautados y confiscados durante las operaciones que movilizan a miles de soldados.

La lucha se ha intensificado contra el récord de 171,000 hectáreas de cultivos ilícitos alcanzados el año pasado en Colombia, con el potencial de producción de cocaína llegando a 1,379 toneladas, según la ONU.

El despliegue de las fuerzas militares es visible en las calles de Tumaco. Pero en el corazón de la selva, donde abundan las plantaciones de coca, la presencia del estado apenas se nota. En los ríos, canoas rápidas cargadas de combustible cruzan los laboratorios de fabricación de cocaína. Estrechos senderos de tablones de madera conducen allí a través del manglar. A lo largo de los 1.300 km de la costa del Pacífico operan guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y pandillas formadas por ex paramilitares de extrema derecha desmovilizados en 2006. Estos grupos armados se enfrentan violentamente. Controlar un territorio que concentra el 39% de las

narcoplantaciones del país, la llegada de los hombres de los carteles mexicanos corresponde a la necesidad de "garantizar el flujo de cocaína", explica Jeremy McDermott de Insight Crimen, un instituto de investigación sobre el crimen organizado en Estados Unidos.

Emisarios

Además, los narcos colombianos se niegan a venderles a los Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de cocaína a 25,000 dólares por kilo. Prefieren mercados más rentables como Europa, Oceanía y Asia. En España, el kilo de cocaína se paga 35,000 dólares, 50,000 en China, 60,000 en Rusia y 100,000 en Australia, según este experto. "Los colombianos han vendido el mercado estadounidense a los mexicanos porque por 25,000 dólares, no vale la pena, dado el alto riesgo de extradición y expropiación de propiedades",

Según la agencia antidrogas estadounidense (DEA), el 84% de la cocaína que ingresó a los Estados Unidos el año pasado llegó del Pacífico. En Colombia, según McDermott, los emisarios de los carteles mexicanos se mueven en lanchas rápidas o sumergibles que transportan la droga hacia América Central o los Estados Unidos. (Delgado et al, 2020).

La violencia y el miedo están empeorando. El estado no hace presencia en los llamados espacios vacíos, Para esto, se toma en cuenta el contexto político internacional imperante y algunos de los problemas que se advierte en Colombia, especialmente en términos de recursos como de conflictividades ligadas a espacios vacíos y a actividades fuera de la ley, por mencionar algunas de las miradas de mayor difusión. Si es interesante, para un militar, el estudio de la historia, no lo es menos el de la geografía, puesto que es escenario, y a veces la causa, en el cual la historia se ha inscrito los grupos terroristas transnacionales, el

crimen organizado como las Bacrim, ELN, en muchos casos utilizan estos lugares para expandir sus actividades del narcotráfico, minería ilegal, contrabando etc

Cohen establece:

En su libro *Geopolitics of the World System* define Geopolítica como: el análisis de la interacción entre escenarios geográficos y sus perspectivas con procesos políticos. Ambos son dinámicos y se retroalimentan. La Geopolítica da cuenta de las consecuencias de esta interacción." La definición se focaliza en la interacción dinámica entre poder y espacio. (2005)

CAPITULO 2

Desarrollo Económico De Las Comunidades Con Cultivos Ilícitos

* El departamento del Cauca tiene 15.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, esas se han convertido en el caldo de cultivo para la violencia que está cobrando la vida de indígenas, docentes y genera las amenazas contra líderes sociales y periodistas.

* Son 233 hectáreas en 249 invernaderos que producen un total de 780 toneladas anuales de marihuana tipo crepey, las que deberán ser erradicadas con esta decisión de las comunidades indígenas. (Uno, 2019).

El alcance y la naturaleza del daño causado por el problema de las drogas varía de una población a otra, pero como quiere que sea, todos se ven afectados. La vulnerabilidad a las drogas, ya sea en la cultura, la producción, el tráfico o el consumo, es un hecho en todas las poblaciones de Colombia,

El vínculo entre el desarrollo económico y las drogas es particularmente evidente en el caso del cultivo ilícito de plantas utilizadas para fabricar drogas en la población de Jamundí. En las zonas rurales, ciertas realidades socioeconómicas como la pobreza y la falta de medios de vida sostenibles son factores de riesgo importantes que alientan a los agricultores a dedicarse al cultivo ilícito. Estos fenómenos también dan testimonio de bajos niveles de desarrollo que, combinados con otros problemas de desarrollo relacionados con la seguridad y el gobierno local, favorecen el cultivo ilícito a gran escala.

La pobreza también está estrechamente vinculada al consumo de drogas, aunque este vínculo es complejo y tiene un efecto sinérgico. De hecho, este consumo afecta sobre todo a las personas que viven en la pobreza en relación con la sociedad en la que viven, como podemos ver claramente en los países más ricos. En términos más generales, existe una fuerte correlación entre las dificultades socioeconómicas y los trastornos relacionados con el consumo de drogas. Encontramos esta misma relación cuando observamos las diversas repercusiones de la marginación y la exclusión social, como el desempleo y la baja educación.

Ruta Creepy Caucana



Figura 2 Ruta Creepy Caucana Fuente: Policía, Fiscalía 2017.

Además del desarrollo, muchos factores, incluida la ubicación geográfica, Jamundí es un municipio que por estar en la margen izquierda del Río Cauca y de contar con poco más de 13.200 has en jurisdicción del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el municipio está expuesto la acción de grupos ilegales sean, grupos armados ilegales como

guerrilla, paramilitarismo y grupos delincuenciales, todos estos grupos promueven la formación de pandillas juveniles que producen todas unas altas tasas de homicidios influyendo en el problema de las drogas en la región. El pertenecer a una región productora de drogas o rutas principales de tráfico, por ejemplo, puede explicar las tasas de consumo de opioides altas contribuyendo a crear mercados de consumo considerables en términos del número de consumidores y los ingresos generados.

Resiembra de cultivos

» Resiembra de cultivos

De las hectáreas erradicadas durante el 2018.



Por lo menos 18.000 fueron nuevamente sembradas.

» Hectáreas fumigadas Vs gasto Vs daños generados



Hectáreas fumigadas

Entre 1994 a 2015

En Colombia se han asperjado por vía aérea casi 1.9 millones de hectáreas.



Durante los primeros 11 años, murieron 62 erradicadores civiles y 442 más resultaron heridos.



Daños dermatológicos y problemas respiratorios.



Aumento en la tasa de abortos espontáneos.



Las demandas por afectaciones a la salud por la aspersión aérea suman 1.7 billones de pesos.



Gastos

noviembre de 2012

Se gastaron 104.331.276,056 dólares en glifosato y 458.331.276,056 dólares en operativos antinarcoóticos.

Figura 3 Resiembra de cultivos, Hectáreas fumigadas UNODC, 2019

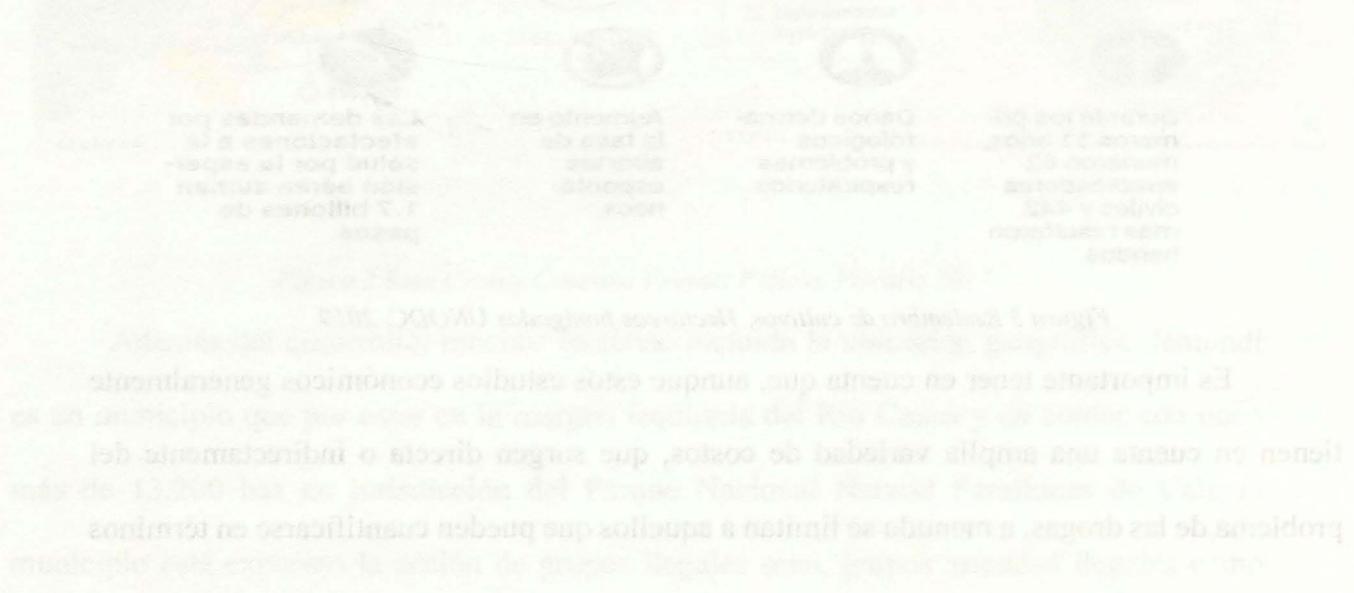
Es importante tener en cuenta que, aunque estos estudios económicos generalmente tienen en cuenta una amplia variedad de costos, que surgen directa o indirectamente del problema de las drogas, a menudo se limitan a aquellos que pueden cuantificarse en términos

monetarios. En Colombia, entre 1994 y 2015 se asperjaron por vía aérea casi 1,9 millones de hectáreas y los cálculos indican que a noviembre de 2012 el Gobierno habría gastado la

Suma de \$104.331.276,056 dólares en glifosato y \$458.331.276,056 dólares en operativos antinarcóticos. (Senado Colombia, 2019)

Los costos intangibles, como la pérdida de vidas (murieron 62 erradicadores civiles y 442 resultaron heridos) y la mala calidad de vida, rara vez se cuantifican, y cuando lo hacen, esto generalmente se hace utilizando indicadores no monetarios, si bien estos estudios pueden ser muy útiles para evaluar el impacto económico de las drogas en la sociedad, hay otros elementos a tener en cuenta al evaluar las consecuencias del problema mundial de las drogas y al debatir las políticas seguir para combatirlo.

El año pasado, el país redujo en 1,2% su área total sembrada con cultivos de coca de acuerdo con el 'Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018', que publica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mientras que en 2017 había 171.000 hectáreas sembradas en Colombia, en 2018 se redujeron a 169.000 hectáreas.

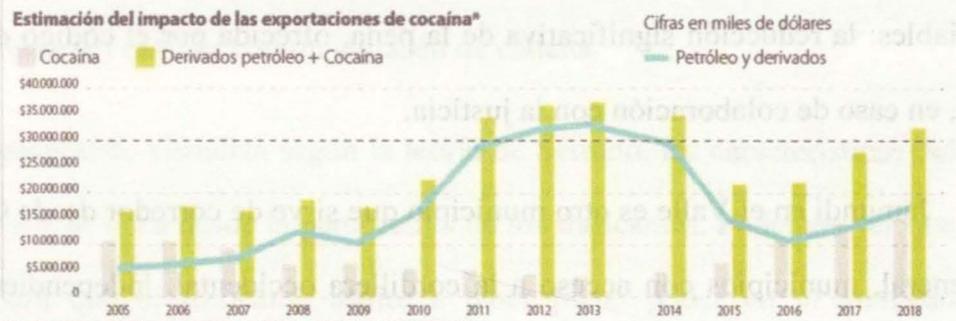
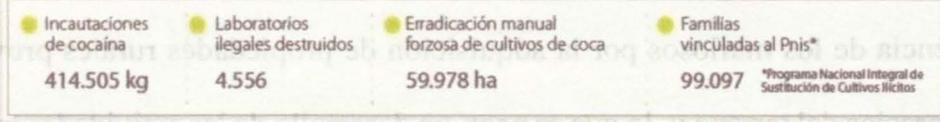


Impacto de la Cocaína en la Economía Colombiana

IMPACTO DE LA COCAÍNA SOBRE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

Censo de Cultivos de Coca en Colombia en 2018

Área neta con cultivos de coca
Calculada a 31 de diciembre
(redondeado a miles)



Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito / *Cocaína, estabilizador macroeconómico colombiano- Andrés Felipe Arias / Gráfico: LR-AG

Figura 4 Impacto de la Cocaína en la Economía Colombiana UNODC, 2018

El año pasado, el país redujo en 1,2% su área total sembrada con cultivos de coca de acuerdo con el ‘Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018’, que publica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mientras que en 2017 había 171.000 hectáreas sembradas en Colombia, en 2018 se redujeron a 169.000 hectáreas.

Efectos del desarrollo sobre el problema mundial de las drogas

La existencia del narcotráfico tiene una influencia muy negativa en los ingresos fiscales. De hecho, fortalece el sector informal, que se está desarrollando con mayor velocidad que el sector formal, lo que evita pagar impuestos en caso de subfacturación de las importaciones, y que se apropia de los subsidios estatales en caso de sobrefacturación de exportaciones,

Además, el gobierno se ha visto obligado a aumentar los presupuestos para la lucha contra el narcoterrorismo y el tráfico ilegal de drogas. Sin embargo, dicho gasto no satisface las grandes necesidades sociales y de infraestructura, cuya sola realización puede garantizar un desarrollo más equilibrado y menos desigual.

Otros efectos negativos del narcotráfico deben ser notados. Así, la marcada preferencia de los mafiosos por la adquisición de propiedades rurales provocó un aumento de los precios del terreno y, lo que es peor, un desarrollo de las actividades militares, dirigidas contra la guerrilla y contra la población sospechosa de apoyarlos. En el plano político, el aumento prodigioso de la corrupción ha permitido a los narcotraficantes obtener ventajas apreciables: la reducción significativa de la pena, ofrecida por el código de procedimiento penal, en caso de colaboración con la justicia.

Jamundí en el Valle es otro municipio que sirve de corredor desde Cali hasta el mar. En general, municipios con acceso a la cordillera occidental, independientemente de que tengan cultivos o no, muy posiblemente registren laboratorios porque sirven de corredor al litoral: Cumbitara, Santander de Quilichao, Samaniego, Dagua, Balboa y Argelia, localidades muy apetecidas por los actores armados, en algunas de las cuales se registran estadísticas elevadas de violaciones a los Derechos Humanos. (Del Pueblo, 2017)

Pese a que el municipio de Jamundí no fue incluido en el Plan de Sustitución de Cultivos de Coca (PNIS) del gobierno nacional, la ex Gobernadora Dilian Francisca Toro planteó a un grupo de representantes campesinos que a nivel regional se adelante un programa para reemplazar cultivos ilícitos en esta zona por una serie de opciones que permitirán mejorar las condiciones de los labriegos.

“Solicité en reunión los cultivos ilícitos, en esa sustitución que no es del programa nacional, porque no se está sustituyendo sino erradicando, estoy dándoles la posibilidad que con la erradicación se pueda tener un cultivo productivo que les pueda dar el sustento”, explicó la mandataria. Que le podamos pedir al gobierno nacional que nos apoye y así de esa manera poder cambiar esa modalidad de cultivos ilícitos en la zona alta de Jamundí por cultivos lícitos”

El gobierno regional garantiza la sostenibilidad del programa con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). A través del Plan Integral Frutícola dos asociaciones de pequeños productores en Quinamayó y Robles cuentan con el apoyo del gobierno departamental y comercializan críticos con un almacén de cadena.

Este análisis, igualmente visualiza según la teoría de Serrano, las características del mercado ilegal de cultivos de coca desde la perspectiva de los traficantes. Podemos ver que existe un incentivo para que el traficante aspire a tener pleno poder en el mercado estableciendo monopsonios en sentido estricto. Analizamos dos casos especiales en ausencia de acción estatal; en el primero, el traficante actúa sin competencia; en el segundo, hay competencia entre dos traficantes. La posibilidad de un uso indiscriminado de la fuerza significa que en ambos casos el resultado es el establecimiento de monopsonios. (2017) Los mercados monopsonicos se definen como aquellos en los que la demanda de una materia prima está concentrada en un comprador único (Nicholson y Snyder, 2010), y es considerado uno de los casos de competencia imperfecta en la que existe poder de mercado.

El Gobierno Colombiano Y Su Política De Defensa Y Seguridad

Uno de los focos de los conflictos en el mundo es el problema global de las drogas, lo que presiona a Colombia a promover un debate serio, técnico y objetivo sobre los enfoques y los resultados de la “Guerra contra las Drogas”. Una discusión abierta, participativa, transparente y libre de ideologías para analizar adecuadamente los diferentes escenarios en la lucha contra el problema mundial de las drogas un llamado a la apertura de miras en la búsqueda e implementación de políticas innovadoras en esta materia la delincuencia organizada transnacional es cada vez más compleja y requiere un enfoque integrado a todos los niveles, nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta los factores socioeconómicos subyacentes. Abogó por empoderar a las personas para evitar que caigan en el crimen.

El gobierno colombiano valora mucho los espacios de diálogo que permitan un análisis objetivo de la situación del país, los avances y las dificultades, y proponer iniciativas orientadas a fortalecer aún más las capacidades institucionales y políticas públicas para promover la garantía de los derechos y el bienestar de toda la población. Colombia está presente para brindar información sobre los desarrollos que han surgido durante el proceso el gobierno no puede negar que la violencia que azota al país desde hace más de cuatro décadas ha impactado al movimiento sindical, por eso no ha escatimado esfuerzos para fortalecer la efectividad de los programas de protección a los sindicalistas. En cuanto a otras categorías de población vulnerable. El gobierno prosigue incansablemente sus esfuerzos para erradicar los factores generadores de violencia, es decir, principalmente el narcotráfico, delitos conexos y otras formas de delincuencia organizada que se utilizan para financiar a los grupos armados ilegales responsables de actos terroristas

Línea De Tiempo Y Víctimas En El Valle Del Cauca Y Cauca 2000/2019

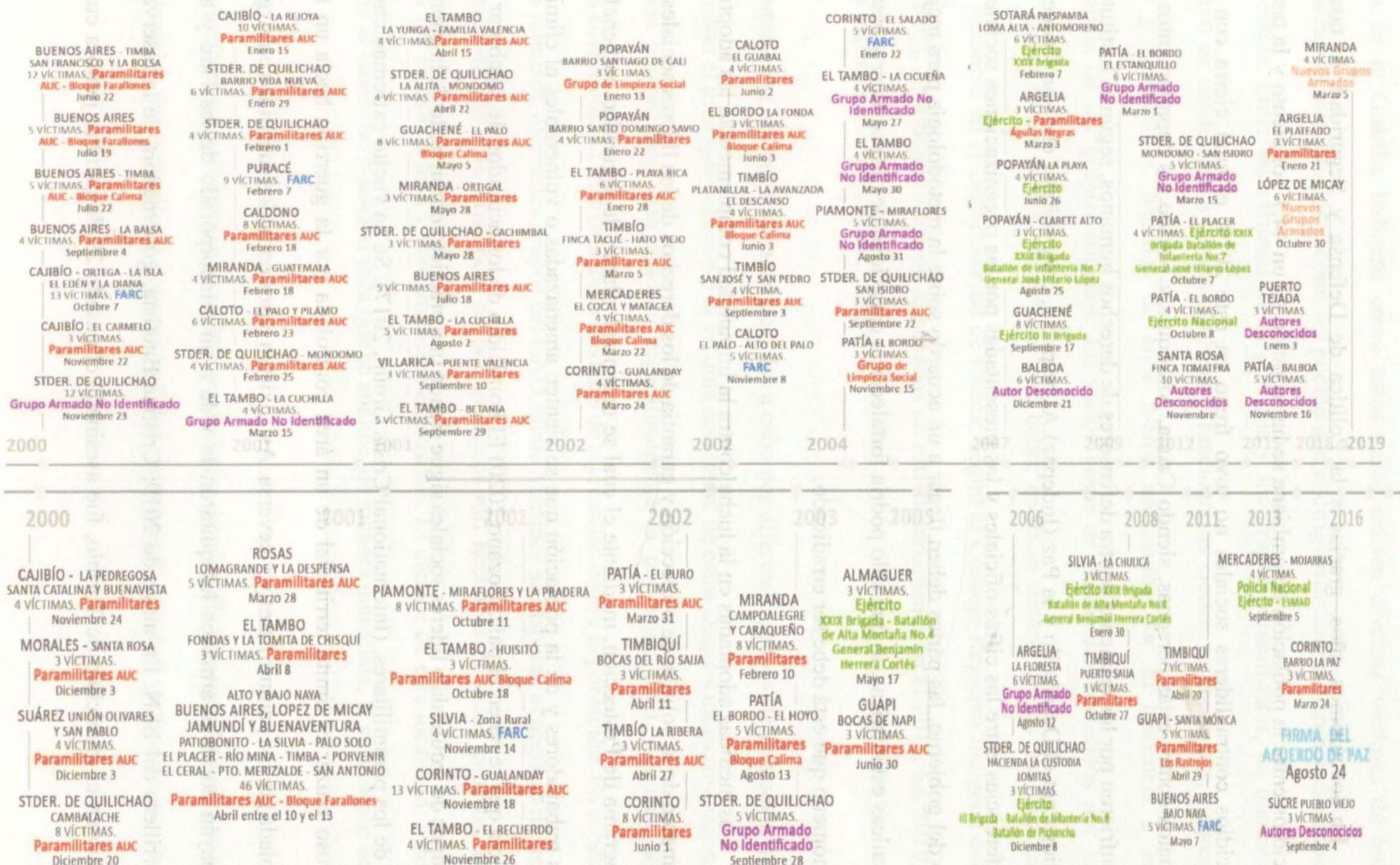


Figura 5 Línea De Tiempo Y Víctimas En El Valle Del Cauca Y Cauca 2000/2019

En los últimos años, gracias a la Política de Defensa y Seguridad, la tasa de homicidios entre la población colombiana se ha reducido en un 44,1 por ciento y la tasa de homicidios contra líderes sociales no tuvo freno en este 2019, el cual cierra con 250 asesinatos contra estas personas, siendo Cauca, Antioquia y Nariño los departamentos que más sufrieron por los crímenes contra defensores de derechos humanos, según el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) Al respecto, cabe señalar que son frecuentes las diferencias entre las cifras oficiales y las presentadas por las organizaciones sociales. A juicio del gobierno, las partes deben llegar a un acuerdo sobre la metodología para mejorar las técnicas estadísticas, lo que solo podría fortalecer la capacidad de diagnosticar y resaltar un fenómeno que está debe ser erradicado.

Las medidas adoptadas en la lucha contra la impunidad complementan las adoptadas en el marco de la política de protección y garantía de los derechos de los líderes sociales por el Programa de Protección, mediante el cual se organizan planes de seguridad en beneficio de los trabajadores y de la población que se sienten amenazadas o vulnerables al clima de violencia que reina en el país.(Lozano,2020) El homicidio de los acusados de colaborar con los grupos de izquierda o líderes sociales sigue siendo una práctica común tanto de la guerrilla como de los paramilitares. (International Crisis Group, 2017). Se ha vuelto extremadamente peligroso cruzar el límite territorial de un área controlada por la guerrilla hacia un área controlada por los paramilitares y viceversa. Así, existen casos como los sucedidos en Argelia y Popayán hombres armados les quitaron la vida a un reincorporado de las Farc y a un exguerrillero del ELN. En mayo de 2019; Cristina Bautista, gobernadora de la reserva de Tacueyó en el municipio de Toribío, fue asesinada el pasado 29 de octubre junto a cuatro

miembros de la Guardia Indígena como estos casos existen diversas víctimas de los paramilitares, mientras que los vecinos del pueblo que se dirigían al campo fueron asesinados por la guerrilla. Entre las víctimas de la guerrilla y los grupos paramilitares, un número significativo de candidatos a cargos públicos y funcionarios electos en funciones, líderes indígenas y campesinos. Muchos de ellos fueron asesinados por su tendencia a la independencia de los grupos armados. En varios casos de homicidio cometidos por la guerrilla, las víctimas fueron asesinadas por haber recibido dinero de las autoridades públicas. Entonces en el Departamento de Cauca, Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 22 indígenas fueron asesinados en este departamento en el 2018. En 2019, son 56 las víctimas mortales. (BBC, 2019)

Durante las acciones armadas llevadas a cabo por diferentes grupos, la población ha sido a menudo el principal objetivo o la víctima accidental de estos ataques indiscriminados. Los grupos paramilitares han atacado específicamente la población civil, a través de asesinatos colectivos. La guerrilla tomó medidas de represalias contra la población. En zonas rurales de Jamundí, diferentes grupos del GAO Jaime Martínez se disputan el negocio ilícito del alcaolide debido a la existencia de por lo menos mil hectáreas de estos cultivos, la población fue atacada a bala y con artefactos explosivos. El alcalde de esta localidad, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se analice, de manera inmediata, la sustitución de cultivos.

Cuando ataca comisarías y guarniciones militares, la guerrilla en general ningún caso de los principios de distinción y proporcionalidad, provocando muchas víctimas entre la

población civil. Así, las armas que eran difíciles de dirigir, como los cilindros de gas, caían sobre casas, matando a civiles.

Suarez Cauca a la deriva del Estado

El municipio de Suárez está ubicado en el noroeste del departamento del Cauca, Colombia, y es muy rico en recursos naturales. Históricamente, los lugareños se han dedicado a la agricultura y la minería artesanal, siendo estas actividades sus principales fuentes de ingresos. (Rojas, 2020) Sin embargo, desde hace varias décadas, la situación en la región ha sido compleja, porque las grandes empresas querían tener el control de estos recursos naturales para explotarlos industrialmente. Los metales preciosos son extraídos por las empresas multinacionales Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resources, la región es un refugio para las inversiones de Smurfit Kappa - Cartón de Colombia, y es una reserva de energía para Unión Fenosa (actualmente Colinversiones), GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), que lo adquirió en OPA por una importante suma de dinero.

En lo que respecta a la minería, las multinacionales quieren tener el control del territorio y los recursos, y se han preocupado de calificar de ilegales las actividades de los mineros artesanales, situación que ha favorecido el desplazamiento de la población hacia otros lugares. Los menores han denunciado estas situaciones porque sus medios de vida están en peligro, pero el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para protegerlos.

Además, se ha registrado la presencia de grupos paramilitares en la región. La presencia de estos grupos armados coincide con las amenazas que han recibido los líderes comunitarios por sus actividades de resistencia contra las empresas multinacionales y con la

presión que han recibido para que abandonen sus territorios. La situación es tan grave que el 11 de abril de 2010 fueron asesinados ocho menores. (International Crisis Group, 2017)

En varias ocasiones, comunidades negras, campesinos, indígenas y organizaciones de derechos humanos se han pronunciado contra la violencia en la región y contra el desplazamiento de comunidades que han habitado el territorio desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de los constantes esfuerzos de las comunidades por crear mecanismos de prevención y protección, el riesgo para los habitantes de la zona es inminente y la impunidad es del 100%.

CAPITULO 3

Papel Del Estado En La Seguridad Del Municipio De Jamundí

Las intervenciones de aplicación de la ley tienen como objetivo restaurar el estado de derecho, que es la base del gobierno y el desarrollo sostenible, y también pueden influir en la disponibilidad de drogas en los mercados ilícitos, tanto al atacar 'la oferta en sí misma para reducirlo, y al aumentar el riesgo al que están expuestos los traficantes, lo que lleva a un aumento en el precio en los mercados de consumo. Sin embargo, las actividades de aplicación de la ley también pueden provocar actos de violencia, especialmente cuando afectan la estructura interna y externa de los mercados ilegales. El gobierno colombiano sugiere que, si las agencias de aplicación de la ley son atacar tanto a los protagonistas como a los vínculos en el narcotráfico que generan la mayor ganancia y violencia, pueden reducir considerablemente la violencia. Por otro lado, las estrategias para dismantelar rápidamente las organizaciones de traficantes y reducir la violencia a corto plazo a veces pueden intensificarla.

El Gobierno Colombiano ha implementado varias modalidades de programas de desarrollo alternativo: Los proyectos piloto de desarrollo alternativo, Los programas de desarrollo alternativo del PLANTE, el Programa Familias Guardabosques (FGB), el Programa Proyectos Productivos (PP) y más recientemente los programas de Post Erradicación y Contención

Cuando se basa en datos científicos, las medidas de prevención, intervención temprana, tratamiento, atención, recuperación, rehabilitación e integración social y todo el sistema de atención para usuarios de drogas permiten para reducir el consumo y así limitar su impacto en la salud pública, que es uno de los elementos esenciales para el bienestar de la

sociedad. Estos avances afectan tanto a los usuarios de drogas como a la sociedad en general, y estas medidas han demostrado ser efectivas

Existen áreas que por acceso o por limitaciones de orden público donde resulta imposible realizar intervención estatal; en estos territorios no intervenidos existe un 17% que continúa afectado por cultivos de coca; sin embargo, un 14% del territorio fue abandonado, áreas que se localizan en mayor proporción al sur entre Buenaventura y Jamundí.

Áreas de manejo especial

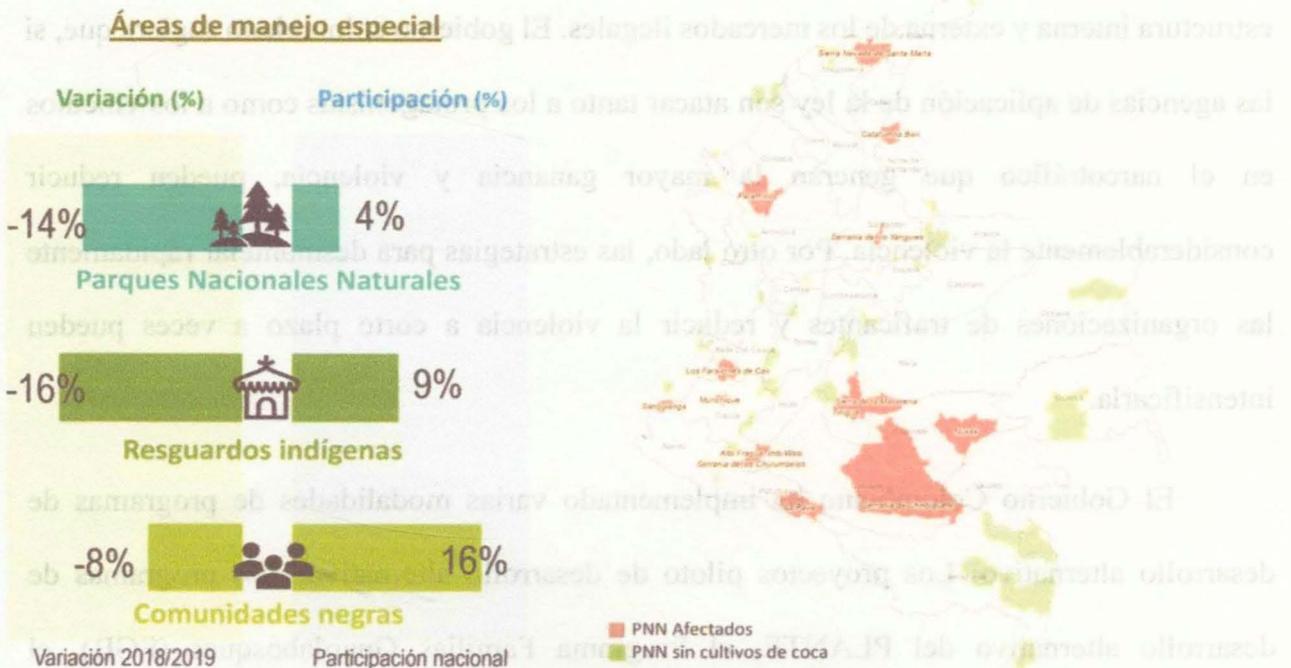


Figura 6 5 Áreas de manejo Especial, 2019, UNODC

Aunque en 2019 hay menos coca en parques naturales, resguardos indígenas y tierras de las comunidades negras, la coca sigue siendo una amenaza para la diversidad biológica y cultural de Colombia. (UNODC, 2019)

Costo de las políticas de drogas

Muchos costos causados directa o indirectamente por las drogas pueden cuantificarse en términos monetarios. Se han realizado varios estudios económicos, cuyos resultados han revelado que este costo varía entre 0.07% y 1.7% del PIB de los países considerados. Además, la mayoría de los países estudiados presentaron una alta tasa de costos generales que se explica por las intervenciones de reducción de la oferta y la demanda (prevención, tratamiento y aplicación de la ley, entre otros) que se llevan a cabo, en lugar de a través de pérdidas de productividad y otros costos indirectos. (Insulza, 2014)

Sobre la dinámica económica departamental: el crecimiento medio de la economía caucana entre el 2000 y el 2014 fue del 5,7%, periodo en el que Colombia registraba el 4,4%. Los mayores niveles de auge fueron 2004 (11,6%) y 2013 (12,2%). La economía reciente del departamento ha tenido una profunda reconversión interna del aparato productivo, caracterizada por una mayor relevancia del sector industrial y de los servicios del Gobierno, contra una participación cada vez más reducida del sector agropecuario el sector agropecuario, cuya participación disminuyó del 18,1% en 2002, a 9,6% en 2013, con una leve recuperación a 11,5% en 2014. Se registra una recuperación reciente del café, plátano y la caña panelera, y la producción pecuaria departamentales. La industria manufacturera del departamento, que tiene una participación importante en el PIB, tiene sus dos principales renglones en la fabricación de papel y cartón, y en la elaboración de azúcar y panela.

El Ejército Toma El Control En Jamundí

Cinco guardias indígenas nasa fueron asesinados el 29 de octubre de 2019 en el departamento del Cauca en el sur de Colombia. Esta masacre es parte de una ola de asesinatos

que afecta a una de las regiones más conflictivas de Colombia, regiones donde las comunidades se oponen a los mega proyectos energéticos y reclaman el derecho a ejercer el control sobre su territorio. Este es el caso de la guardia indígena, que con la ayuda de un bastón simbólico que representa la autoridad colectiva de la comunidad, defiende sus territorios de todas las amenazas que ponen en peligro la posibilidad misma de vivir allí. Todo parece indicar que los responsables de estas muertes serían un grupo residual de las FARC.

Ante la presión de los crecientes asesinatos políticos, el gobierno nacional anunció la llegada de 2.500 militares para colaborar con las autoridades tradicionales. Las autoridades del Naya (Cauca) se mantienen firmes, prohíben la presencia de cualquier actor armado en sus territorios, lo que incluye al ejército nacional denunciado por las atrocidades cometidas. La asamblea comunitaria, reunida para definir cómo afrontar la situación, considera que el gobierno es responsable del aumento de la violencia. Esta es una respuesta a la cancelación de los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca que, según los acuerdos de paz con las FARC, iban a permitir el ingreso a una fase de transición para que la región saliera de la economía ilegal.

Dos días después, cuatro personas fueron encontradas asesinadas en el norte del departamento. Estas muertes se suman a la larga lista de 660 líderes sociales asesinados en los últimos cuatro años. El CRIC - Consejo Regional Indígena del Cauca y la ONIC - Organización Nacional Indígena de Colombia exigen la renuncia del Ministro de Defensa.

Durante varios meses se había denunciado la política del Ministerio de Defensa, denunciando que alimentaba la guerra, más que la protección de la población. El caso se

remonta a meses atrás, como es habitual, el ministro de Defensa anunció vía Twitter una victoria militar contra los disidentes de las FARC en el departamento de Caquetá. Los bombardeos dejaron 15 muertos. Sin embargo, en debate en el parlamento, un informe médico forense estableció que siete de los cuerpos pertenecían a niños y adolescentes, contradiciendo la versión expuesta a Naciones Unidas unas semanas antes. Esta violación del derecho internacional humanitario provocó la renuncia del ministro el 6 de noviembre.

La gravedad de la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia excede los límites del conflicto armado interno. Sin embargo, el tema tiene efectos sobre el respeto y goce de los derechos fundamentales en el país. Al observar las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario por parte de todas las partes involucradas. El continuo deterioro y degradación de las condiciones en las que se desarrolla el conflicto es muy profundo y llama a los grupos armados a someter sus acciones a las normas del derecho internacional humanitarios y evitar dañar a la población civil y dañar el medio ambiente son completamente ignorado y, a veces, incluso rechazado. En estas condiciones, se ha llegado al punto en el que no solo los combatientes no respetan a la población civil, pero llegan a ignorar las normas humanitarias elementales que les son aplicables

Más Ejército, Armada y apoyo tecnológico para el Valle decidió consejo de seguridad encabezado por Min defensa y Gobernadora. Ahora continúan los infantes de marina con aproximadamente 500 hombres, las operaciones. Así mismo, estos nuevos soldados entrenados por el Ejército Nacional, además del batallón de combate que inició sus operaciones recientemente, para enfocar esfuerzos en el campo y la reducción de Grupos Armados Organizados que cometen delitos en el suroeste del país.

Así lo reveló el ministro de Defensa Nacional, (2018/2019) Guillermo Botero, al término de un consejo de seguridad en la capital del Valle del Cauca, el cual, acompañado de los comandantes militares, y policías, y las autoridades civiles y militares de la región, escuchó las preocupaciones de seguridad más latentes expresadas por senadores de la República, representantes de la cámara, alcaldes y miembros de sindicatos locales.

El ministro de Defensa dijo que se ha realizado una inspección sobre la situación de seguridad de algunos municipios que se comportan de manera crítica, como la ciudad de Buenaventura. “Ya tenemos más de 500 infantes de marina en esta zona, y si bien es cierto que tenemos un aumento de homicidios, la tendencia ha disminuido significativamente. Antes teníamos un crecimiento del 90%, hoy tenemos un crecimiento del 22%, lo seguiremos mejorando”. Se habilitó una mesa de trabajo para revisar las inversiones que se realizarán con los recursos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, muchas de ellas orientadas a fortalecer la seguridad en el Departamento del Valle

Minga Indígena: "Hay muchas razones para protestar"

El 23 de mayo de 2019, azotado por un sol despiadado que no disuadió a los 5.000 indígenas que recorrieron los 14,5 kilómetros entre Jamundí de Cali. Estas personas llegaron a Cali para una manifestación de protesta contra las violaciones de derechos humanos en sus territorios y en solidaridad con Buenaventura, el departamento de Chocó y La Guajira. La Minga (o gran marcha) confirma un clima de protesta social que atraviesa el país. Los comuneros del Norte Cauca, Valle, Huila o incluso Antioquia se concentraron en Jamundí a primera hora de la mañana para gritar su indignación por el hostigamiento que viven en sus territorios, pero también, con énfasis en la solidaridad con Buenaventura, Chocó, La Guajira o incluso con profesores y alumnos del país.

“No tenemos otra forma de mostrar nuestra ira, es la Minga nuestro medio de expresión para denunciar al gobierno sobre la situación de violaciones de derechos humanos en territorios indígenas. Estarán presentes representantes regionales de todos los sectores de la Organización Nacional Indígena de Colombia. “El gobierno intentó boicotear la audiencia e impedir que vinieran un gran número de comisionados regionales, pero lo que no entendió es que esta es solo la primera Minga de unas series largas y que la gente ya no se encargue de ello”, dijo otro participante de Minga.

Son muchas las comunidades que tomarán la carretera Panamericana ¿Las razones que la llevaron a unirse a la Minga? “No faltan... miren: las violaciones a los acuerdos tras el paro y bloqueos de la Minga de 2013, la cuestión agraria, la falta de respeto a la consulta previa consulta a los pueblos indígenas antes del inicio de proyectos extractivistas o impactantes, los asesinatos de nuestros hermanos y hermanas...”. Su compañero de caminata señala que, aunque están acostumbrados a que el gobierno no cumpla sus promesas, "siguen exigiendo que se respeten los derechos".

Recuperación De Tierras Espera Una Ofensiva Masiva En El Cauca

El proceso de liberación de la Madre Tierra se prepara para el inminente cumplimiento del poder agroindustrial y político de Colombia frente a su proceso de liberación del norte del Cauca (sur de Colombia). Todos los actores involucrados en esta violenta expulsión como los alborotadores, políticos, agroindustriales y el sector financiero, apoyan el proceso de paz llegando a la etapa de guerra abierta contra el pueblo, las comunidades del Norte Cauca retoman la lucha por la recuperación de tierras desde el 2014 fundando caseríos dentro grandes fincas en proceso de liberación. Cuenta la tradición y la

memoria de los ancianos y ancianas que vivían en estas tierras ahora monopolizadas por el monocultivo de la caña de azúcar. (Díaz, 2004)

Desde que se planeó La Emperatriz en 1991 la masacre de Nilo con la fuerza pública los propietarios decidieron masacrar a una veintena de personas que luego recuperaban tierras.

La forma de explotación de estas haciendas también maltrata a la Madre Tierra, por eso, el pueblo Nasa, está preparado para la lucha por la liberación de la Madre Tierra llamando a la solidaridad internacional para apoyar la acción directa de recuperación de las riquezas del Cauca por parte de los indígenas Nasa

Cansados tanto de estar relegados a las tierras montañosas del Cauca como de esperar la implementación de los acuerdos firmados por el gobierno, más de 3.000 indígenas Nasa han participado en una nueva recuperación de 6.500 hectáreas de tierra desde diciembre de 2014. Ocupan el terreno que hoy pertenece, ante la ley, a uno de los hombres más ricos del país: Carlos Ardila Lülle, multimillonario dueño de grandes firmas colombianas como Iberplast, Postobón, el polo agroindustrial Azucarero Incauca, los canales de televisión o radio de masas Mundofox y RCN. El líder paramilitar Mancuso ha acusado a Lülle de haber pagado miles de dólares cada mes a los paramilitares para garantizar la seguridad de sus negocios. Asimismo, el territorio del Cabildo autóctono es un espacio multiétnico, compartido entre indígenas, afrocolombianos y campesinos. La forma de organización es la asamblea. Es la comunidad la que decide de forma conjunta y discute hasta llegar a un consenso. Los habitantes del norte del Cauca reclaman una vida con dignidad y autonomía y hacen un llamado a la solidaridad internacional. (Urrego-Rodríguez, 2020)

CONCLUSIONES

La violencia, como hemos visto, se convierte en un modo de funcionamiento que corroe las propias instituciones. El estado de derecho, por supuesto, continúa, pero sin dominar, o casi, el curso de las cosas. Es cierto que la intervención de un actor muy concreto, Estados Unidos, introdujo brutalmente a un tercero en las interacciones entre los protagonistas al hacerlos aparecer a todos como miembros de una comunidad delincente. Los límites del método del ultimátum no son menos obvios: pueden dar una nueva perspectiva de la situación, pero también se asemejan mucho a la interferencia de un protagonista adicional. En todo caso, Estados Unidos no necesariamente tiene un título, más allá de la relación de fuerza, para identificarse con la Ley y, menos aún, para que sea admitido por los colombianos, aunque sus leyes sean deficientes.

Los cárteles han logrado el dominio del mercado interno e internacional y han logrado, especialmente en Cali, una importante infiltración de los sectores legales de la economía, la política y los aparatos coercitivos del Estado. En cierto modo, no solo han influido en la sociedad y la cultura, también las han transformado. Después de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, Medellín y Cali dejaron de ser las mismas ciudades. Sin embargo, esta conclusión puede aplicarse al país en su conjunto. (Londoño, 2018)

Más allá de la delincuencia y el aumento de las estadísticas, la vida cotidiana en Cali, como en Medellín, presentó cambios importantes. No hay muchos estudios sobre este tema, pero la gente cuenta cómo a principios de la década de los noventa, la presencia del narcotráfico se convirtió en una realidad. Como resultado de la persecución, el clima volvió a cambiar. La imagen de los asesinos que se creían dueños de la ciudad ya no tenía el mismo impacto. Al mismo tiempo ha disminuido el desarrollo de la construcción, el precio de la

tierra y las propiedades urbanas, la cantidad de lujosas tiendas y joyerías, el mercado de las flores y todo el comercio, las empresas deportivas y el éxito de los equipos de fútbol. Por otro lado, se ha incrementado el desvío del bien público; como si unos pocos políticos y funcionarios, los huérfanos del cartel no hubieran tenido otro recurso. El departamento del Valle y su capital, Cali, se declararon en quiebra.

Sin embargo, no se puede decir que la responsabilidad de todo esto pueda atribuirse totalmente al narcotráfico. La realidad colombiana es suficientemente compleja y se compone de múltiples actores y tantas escenas de acción. Los estudios sobre este tema aún son frágiles. El problema del narcotráfico aún no se ha abordado de manera satisfactoria. El peligro que amenaza a todos aquellos que intentan abordar el tema es muy real. Pero también hay que considerar que hasta ahora la atención se ha centrado más en sus consecuencias -la violencia, por ejemplo- que en su estructura interna y contenido social.

Esto sólo subraya la importancia del problema que abordamos en este artículo: el intento de establecer categorías que permitan caracterizar la particularidad de los grupos comprometidos con el tráfico de estupefacientes en Colombia. Es obvio que Colombia no ha conocido una mafia a la italiana, pero el caso no es tan sencillo para enmarcarlo en el paradigma general del crimen organizado. Nuestra respuesta va en dirección a un sistema híbrido: el crimen organizado de tipo mafioso. Sin embargo, la respuesta analítica que formulamos también responde a tiempos y coyunturas. Esto se aplica a los cárteles. Pero con su desaparición, los prototipos mafiosos de organizaciones parecen ceder poco a poco, pero no del todo. Además, la participación de guerrilleros y paramilitares en el comercio parece obedecer a otras formas de organización aún por estudiar. Tantos desafíos para el análisis.

(Galindo, 2016)

Como podemos ver, la historia del narcotráfico en Colombia sigue su curso: la detección constante de traficantes en aeropuertos y cargas demuestra que el comercio continúa; lo mismo ocurre con las noticias sobre la destrucción de cultivos y laboratorios o incluso operaciones de captura de traficantes (como las recientes operaciones conocidas como Milenio I y II) 37; y finalmente, constantes solicitudes de extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de la gran capacidad de innovación y adaptación que han mostrado los traficantes en los últimos años, están perdiendo posiciones importantes en materia de control comercial a favor de otras organizaciones, en especial mexicanas y rusas. Esto ocurre por dos razones principales: primero, porque las acciones norteamericanas en la lucha contra el narcotráfico se han centrado en Colombia y han golpeado duramente a los “cárteles” y narcos colombianos, permitiendo que la gente 'otros actores para tomar posesión del comercio; en segundo lugar, por la situación interna marcada por una encarnizada pugna entre diversos actores por la apropiación de los recursos generados por el tráfico ilícito. Los sucesivos enfrentamientos, alianzas y negociaciones entre guerrillas, paramilitares y narcotraficantes se han convertido en un juego frente al narcotráfico que nadie puede controlar por completo.

Nuestra hipótesis de ninguna manera pretende predecir una desaparición del narcotráfico y las organizaciones que se ocupan de él en Colombia. Simplemente, subrayamos, por un lado, la imposibilidad de controlar el comercio en su totalidad y la necesidad de reconciliarse con los distintos grupos que integran la red del narcotráfico; y, por otro lado, el creciente enfrentamiento entre los grandes aparatos militares -guerrillas y

paramilitares- por el control del territorio donde operan los laboratorios y donde se cultiva la materia prima de la droga.

La estrategia de combate al narcotráfico, liderada por el gobierno colombiano y especialmente por el Departamento de Estado norteamericano, no ha logrado su objetivo. Ha habido éxitos parciales en una serie de casos importantes, incluida la reforma policial, los golpes a la corrupción y el desmantelamiento de cárteles, por ejemplo. Sin embargo, el proceso continúa y puede continuar a pesar de las ayudas fijadas por el "Plan Colombia" en más de 860 millones de dólares. La ofensiva planificada hacia el sur con el refuerzo de tres batallones antidrogas, cada uno integrado por 950 hombres entrenados con ayuda norteamericana, pagados con una suma anual de dos millones de dólares por el gobierno del Norte y movilizados en helicópteros modernos (black hawk): puede agravar el conflicto armado e inducir a las organizaciones guerrilleras a desarrollar una estrategia cada vez más cercana al terrorismo generalizado. Las plantaciones de coca pueden cambiar y causar daños cada vez más graves a la ecología pulmonar del Amazonas. No sabemos qué puede pasar con los desplazados. Tampoco está claro cuál será el resultado del "proceso de paz", obstaculizado por el problema del narcotráfico, ni cuál será el destino de cientos de guerrilleros y paramilitares que han conocido de primera mano el papel financiero de las drogas. Si algo alimenta la guerra en Colombia son los millones de dólares generados por la producción y exportación de narcóticos. Lo único realmente claro es que el crimen organizado nacional e internacional podrá adaptarse a estas condiciones desplegando nuevas iniciativas, produciendo cambios y sistemas, parte de una historia cuyas páginas son escribir bajo el efecto de la persistencia del consumo.

Finalmente, pero no menos importante, este documento quiere aportar a la construcción de paz en el territorio colombiano. La problemática de producción de cultivos ilícitos y su estrecha asociación con el narcotráfico, el microtráfico y el consumo de sustancia psicoactivas, configura un universo de criminalidad que ha estado estrechamente asociado con el conflicto colombiano; el proceso de paz impulsado por el Gobierno de Colombia incluye la solución al problema de las drogas como uno de los puntos claves para la finalización del conflicto, por lo que este trabajo aspira también a hacer parte de las herramientas que podrán usarse para encontrar caminos de solución duradera y sostenible a esta problemática.

REFERENCIAS

- Alcaldía Jamundí (2020) <http://www.jamundi.gov.co/Paginas/Inicio.aspx>
- Arboleda, D. (2017). Entre la legalidad e ilegalidad de los cultivos de coca en Colombia: Realidades desde el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia Cauca. *Perspectivas Rurales. Nueva época*, 15(30). pp. 77-103. DOI: <http://dx.doi.org/10.15359/prne.15-30.5>
- BBC News Mundo (2019) Asesinatos de indígenas en Colombia: "Es un genocidio", 6 claves para entender los crímenes en el Cauca
- Bolaños, E. (2016). La "Suspensión" del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia: ¿Una solución humanitaria o un cambio para que todo siga igual? Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de
- Bolaños, M., & Daza, J. (2012–2015). Programa Agropecuario Del Municipio De Jamundí Período 2012 - 2015. Secretaria De Ambiente Y Desarrollo Agropecuario Sostenible. <http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionYControl/Programa%20Agropecuario%20del%20Municipio%20de%20Jamund%C3%AD%202012%20-%202015.pdf>
- Cabra, N. (2019). Del papel a la sustitución de cultivos ilícitos: análisis de la implementación del punto 4 del acuerdo de paz en el departamento del cauca. *Econógrafos. Escuela de Economía*. 143. 13 p. Recuperado de <http://www.fce.unal.edu.co/media/files/CentroEditorial/documentos/econografos/EE/econografos-EE-143.pdf>

- Caicedo Cuervo, C. J. (2005). Expectativas racionales y persistencia de los cultivos ilícitos de coca en Colombia: 1986-2003 (Master's thesis, Bogotá-Uniandes).
- Castañeda, O. (2019). Aprendizajes y habilidades blandas: una apuesta para la paz en la sociedad colombiana. Universidad Antonio Nariño. Recuperado de: <https://pdfs.semanticscholar.org/68d5/99ba91599439677ca0d538fe8accbff3fe73.pdf>
- Del Pueblo, Defensoría (2017). Informe Especial Grupos Armados Ilegales Y Nuevos Escenarios De Riesgo En El Posacuerdo.
- Delgado-Morán, J. J., Jiménez-Reina, J., & Cremades-Guisado, Á. (2020). Analytical Approach to Emergent Hybrid Threats Phenomena. Case Study: EU and Colombia. In A Shift in the Security Paradigm (pp. 49-68). Springer, Cham.
- Díaz Pabón, F. A. (2004). Construcción de un modelo de simulación para analizar el comportamiento de los cultivos ilícitos en Colombia haciendo uso de la dinámica de sistemas (Bachelor's thesis, Bogotá-Uniandes).
- Galindo Perdomo, Y. T. (2016). La responsabilidad social empresarial y su aplicación en el posconflicto en Colombia.
- Garzón, J.C.; y Llorente, M.V. (2018). ¿Por qué siguen aumentando los cultivos de coca en Colombia? Fundación Ideas para la Paz. Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5b329de72d085.pdf>
- Gómez, N. (2018). Estudio de Prefactibilidad para cultivo de Sacha Inchi en el corregimiento de Potrerito en el departamento de Valle del Cauca, Colombia. (Trabajo de Grado Universidad Autónoma de Occidente). Recuperado de <https://pdfs.semanticscholar.org/68d5/99ba91599439677ca0d538fe8accbff3fe73.pdf>

[https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/4372/4/Suspensi%
livosato%20en%20Colombia%20pdf.pdf](https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/4372/4/Suspensi%c3%b3n%20del%20g
livosato%20en%20Colombia%20pdf.pdf)

Insulza, J. M. (2014). El problema de drogas en las Américas: Estudios; Drogas y salud pública.

International Crisis Group (Bruselas). (2017). Los Grupos Armados de Colombia Y Su Disputa Por El Botín de la Paz. ICG.

Junguito, R.; Perfetti, J.; y Delgado, M. (2017). Acuerdo de Paz: Reforma Rural, Cultivos Ilícitos, Comunidades y Costo Fiscal. Nueva Serie Cuadernos de Fedesarrollo. 55. pp 1-184. Disponible en

[https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3344/CDF_No_55_F
ebrero_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3344/CDF_No_55_F
ebrero_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

Londoño, J. C. C. (2018). México y Colombia: el narcotráfico, más que un destino común, un proyecto común. Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico, 12(2).

López, M.; Guarín, C.; Medina, O.; y Zuleta, H. (2019). Proceso de paz con las FARC y cultivos de coca en el período 2013-2017. Facultad de Economía Universidad de los Andes. Disponible file:///C:/Users/artem/Downloads/SSRN-id3449221.pdf

Losada, C. (2017). Un acercamiento a la sustitución de cultivos ilícitos para Colombia, con enfoque en Puerto Rico Caquetá. Análisis de 2007 a 2014. (Trabajo de Maestría Universidad Santo Tomás). Recuperado de

[https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/9431/LosadaChristian2017.pdf?se
quence=1&isAllowed=y](https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/9431/LosadaChristian2017.pdf?se
quence=1&isAllowed=y)

Lozano, A. F. S., & Amaya, L. F. S. (2020). Análisis de las medidas de protección a los defensores de derechos humanos en Colombia, 2016-2019. Novum Jus, 14(1), 105-135.

- Luque Revuelto, R. M. (2016). Los desplazamientos humanos forzados recientes en el cauca (Colombia): características e impactos sociales y espaciales.
- Mejía, M. V., & Agudelo-Londoño, S. M. (2019). El glifosato alza el vuelo. Análisis retórico Del discurso en la prensa nacional de Colombia (2018-2019). *Signo y Pensamiento*, 38(75).
- Moreno, C. (2019). Las dinámicas del conflicto en el sur de Colombia: cultivos de coca y actores armados. (Trabajo de grado Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano). Recuperado de <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/7933/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Niño, L. (2005). "Valle en paz"; Programa de desarrollo y paz del Suroriente Colombiano. *Revista Escuela De Administración De Negocios*, (55), 51-59. Recuperado a partir de <https://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/view/350>
- Organización de los Estados Americanos. (2013). El problema de las drogas en las Américas.
- Parra Castaño, V. (2018). El aminoramiento del desarrollo alternativo en el ordenamiento jurídico colombiano como instrumento administrativo en la lucha contra cultivos ilícitos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/19651>
- Pastrana, E. & Castro, R. (2017). Desafíos y escenarios para la política exterior colombiana en un contexto de posconflicto. *Prospectivas en seguridad y defensa en Colombia* (pp. 26-40). Bogotá.

- Posada Salazar, V., & Sosa Arango, J. (2019). La tasa de cambio y los cultivos de coca en la región andina (Bachelor's thesis, Universidad EAFIT).
- Puentes, M. (2017). La militarización en Colombia y el papel de Estados Unidos: Evocando la Doctrina de Seguridad Nacional. *Revista Cambios y Permanencias*, 8(2), pp. 256-277. ISSN 2027-5528. Recuperado de <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/7784/7962>
- Rodríguez, L. (2017). Evidencias del márketing territorial y el desarrollo local en el Municipio de Jamundí-Valle del Cauca. Trabajo de Grado para optar al título de Administrador de Negocios. Universidad de San Buenaventura Colombia. Disponible en http://45.5.172.45/bitstream/10819/7293/1/Marketing_Territorial_Desarrollo_Rodriguez_2017.pdf
- Rojas, A. P. B. (2020). Teogonías de los pueblos indígenas en Colombia: ¿una erótica sin dominación? *Análisis: revista colombiana de humanidades*, (96), 123-149.
- Romero, M.; y Silva, J. (2009). Erradicación de cultivos de uso ilícito: fracaso del Plan Colombia y éxito del efecto globo. *Criterios: Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional*, 2(1), pp 235-253. Disponible en <https://revistas.usb.edu.co/index.php/criterios/article/view/1896/1640>
- Sampó, C. (2019). El tráfico de cocaína entre América Latina y África Occidental. *URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, (24), 187-203.
- Senado, Colombia (2019). Prohibición Glifosato y sus Derivados. <http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/comisiones/constitucionales/comision-quinta/proyectos-de-ley/proyectos-de-ley-y-ponencias-periodo-constitucional-2018-2022/listado-de-proyectos-de-ley-en-tramite-legislatura-20-julio-2019-20-julio-2020->

1/p-de-l-no-047-de-2019-senado-prohibicion-del-glifosato-y-sus-derivados/3875-ponencia-1er-debate-pl-047-19-s-prohibicion-glifosato-y-sus-derivados/file

Serrano López, M. (2017). Condición monopsónica de los mercados ilegales: el caso de los cultivos ilícitos de coca. *Cuadernos de Economía*, 36(70), 49-73. Disponible en <http://www.scielo.org.co/pdf/ceco/v36n70/0121-4772-ceco-36-70-00049.pdf>

Thoumi, Francisco E. (2005). Ventajas competitivas ilegales, el desarrollo de la industria de drogas ilegales y el fracaso de las políticas contra las drogas en Afganistán y Colombia. *Revista análisis político* N° 54, Bogotá. Págs. 30-48. http://www.javeriana.edu.co/blogs/gtobon/files/Drogas-enColombioa-y-Afganistan_thoumi.pdf. Consultado el 20 de junio de 2014.

Tiempo, C. (2020). Preocupa que tentáculos de la coca se extendieron hacia sur del Valle. Retrieved 22 May 2020, from <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/zonas-del-valle-con-mas-cultivos-de-coca-392174>

Uno, Canal (2019). Indígenas erradicarán cultivos de coca en el Cauca. Retrieved 9 July 2020, from <https://noticias.canal1.com.co/noticias/indigenas-erradicaran-cultivos-de-coca-en-el-cauca/>

Urrego-Rodríguez, J. H. (2020). Las luchas indígenas por el derecho fundamental a la salud propio e intercultural en Colombia. *Saúde em Debate*, 44, 79-90.

Villamarín, C.; Rincón, A. (2016). Efecto de los cultivos ilícitos en la producción de café en Colombia. *Revista Alimentos hoy*. 23(36). 102-116. Disponible en <https://alimentos hoy.acta.org.co/index.php/hoy/article/view/375/319>

Zuluaga-Mogollón, M. V., Zuluaga-mogollón, M. del P., & Rozo-Leguizamón, Y. (2019). Arvejas Obonuco Andina y Obonuco San Isidro como alternativas productivas para la

sustitución de cultivos ilícitos en el sur de Colombia. *Rev.investig.desarro.innov*, 10(1),

23-35.doi: 10.19053/20278306.v10.n1.2019.10009

LIBRO DE REGISTRO DE LOS LIBROS

"TOMAS RUEDA VARGAS"



201004063

